



**Instituto de
Economía
Internacional**

DT 2009-22

Documento de Trabajo / Working Paper

Aspectos fiscales y hacendísticos

Poveda Blanco, F.



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

El IEI es un instituto interuniversitario de investigación de las universidades de Alicante, Jaume I y Valencia. Esta serie es editada en la Universidad de Alicante y sus documentos pueden ser descargados gratuitamente en la página web del Instituto.

The IEI is a inter-university institute of research created by the Spanish universities of Alicante, Jaume I and Valencia. This series of documents is edited at the University of Alicante. Papers can be downloaded free of charge at Institute's website.

Instituto Interuniversitario de Economía Internacional
Universidad de Alicante / University of Alicante
Campus de San Vicente del Raspeig – E 03690 Alicante
Tel +34 965903782 / +34 965903582 - Fax +34 965903816
<http://iei.ua.es>

DT 2009-22
Documentos de trabajo IEI

Poveda Blanco, F. (2009): "Aspectos fiscales y hacendísticos", Universidad de Alicante, Documento de trabajo del Instituto Interuniversitario de Economía Internacional (IEI), DT 2009-22, <http://iei.ua.es>.

ISSN 1989-6867

MONOGRAFÍA 22

ASPECTOS FISCALES Y HACENDÍSTICOS

Poveda Blanco F

Introducción.....	4
1. Antecedentes de la financiación local	6
2. El estado actual de la fiscalidad local.....	11
Consideración final.....	36
BIBLIOGRAFÍA	38
ANEXO. Cuadros estadísticos	40

Este documento de trabajo forma parte de un conjunto de treinta monografías, fruto del convenio de colaboración entre las Cámaras de Comercio de Alicante, Alcoy y Orihuela y el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante para la elaboración del Plan Alicante Horizonte 2020, con el objetivo de formular objetivos y propuestas de futuro para la provincia de Alicante.

Introducción

El análisis de la fiscalidad en el ámbito espacial de la provincia de Alicante, y de ciertos aspectos hacendísticos relacionados con la gestión del sector público, adquiere gran importancia por razones muy diversas que no es necesario analizar en este trabajo.

La actividad financiera que requiere la realización de importantes gastos a las Corporaciones locales y a la Diputación Provincial, resulta imprescindible para atender las múltiples tareas que los ciudadanos les exigen, mucho más allá de las competencias que la propia Constitución española (CE) les encomienda. La buena gestión y administración de los recursos públicos, la defensa de una fiscalidad justa y de la que se desprendan beneficios sociales y económicos para el colectivo analizado justifican sobradamente este capítulo del Plan estratégico provincial.

Es cierto que el análisis de la Hacienda de las Corporaciones locales se debe hacer desde el conocimiento de que estas instituciones mantienen un alto grado de dependencia de los niveles de gobierno superiores -Estado y CC AA- por la ausencia de capacidad normativa que le caracteriza, aun siendo así, no es menos cierto que los principios constitucionales de autonomía local¹ y de suficiencia financiera² deben servirles de bastión suficiente para que alcancen el mejor desarrollo y ejerzan una positiva influencia social y económica en nuestra provincia.

Para el mejor tratamiento del tema hemos considerado conveniente realizar su análisis, diagnóstico y efectuar los pronósticos y recomendaciones desde una doble posición:

¹ Acerca del principio de autonomía, en la exposición de motivos de la LRHL se dice “que se traduce en la capacidad de las entidades locales para gobernar sus respectivas Haciendas supone algo más que la supresión de la tutela financiera del Estado sobre el sector local, involucrando a las propias corporaciones en el proceso de obtención y empleo de sus recursos financieros y permitiéndoles incidir en la determinación del volumen de los mismos y en la libre organización de su gasto.

² Respecto a la que se expresa en el mismo texto que “no solo adquiere su consagración institucional, sino que, además, encuentra en la presente ley los mecanismos necesarios para poder convertirse en realidad material”.

- a) Desde la perspectiva de los recursos y medios de los que se sirve la Hacienda local, sin excluir el análisis de las consecuencias derivadas para los ciudadanos.
- b) Desde el estadio referente al colectivo empresarial, en el que se ha de considerar la fiscalidad que desde todos los niveles soportan –estatal, autonómica y local-, y especialmente la singularidad del tejido y el tamaño de las empresas alicantinas.

1. Antecedentes de la financiación local

La situación en la que se encuentra la financiación local de la provincia de Alicante, no difiere, en general, de la que caracteriza al resto de nuestro país, que en términos concisos puede ser definida como anoréxica.

La endémica insuficiencia financiera que ha caracterizado a las Corporaciones locales españolas tampoco se resolvió con la entrada de la democracia, pese a que nuestra Constitución (CE) atribuyó a los entes locales los dos principios rectores tan importantes ya citados: autonomía local y suficiencia financiera.

Tras aprobarse la CE, la constante demanda de atención dirigida al legislador para que mejorase los mecanismos financieros al alcance de las corporaciones locales en desarrollo de dichos principios sería atendida, aunque tardíamente³, a través de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales (LRHL).

La reforma intentó deslindar y concretar el alcance del poder financiero atribuido a ellas por el art. 133.2, y establecer un sistema de recursos que diera respuesta positiva a las exigencias contenidas en el art. 142 de la CE, en el que no faltaran las sempiternas ayudas estatales, que fueron fijadas en la participación en los tributos del Estado (PIE), configuradas como un derecho constitucional y materializadas por un porcentaje sobre la recaudación líquida del Estado. El otro mecanismo financiero para alcanzar la suficiencia de las entidades locales se sustentó en el empleo de los tributos propios.

En relación con estos últimos, la LRHL estructuró el conjunto de los tributos en general, en dos grandes bloques: atendiendo a la obligatoriedad de su exacción se establecieron tres impuestos, IBI, IAE e IVTM, cuya gestión sería compartida; mientras que con discrecionalidad de su exigencia, reforzando la autonomía, se

³ El propio legislador confiesa en la Exposición de motivos la tardanza sufrida en la aprobación de esta reforma, con palabras clarificadoras "En ocasiones, determinadas reformas legislativas cuya necesidad es incuestionable y unánimemente admitida, se ven sucesiva y reiteradamente aplazadas debido a circunstancias imprevistas que van marcando inexorablemente el ritmo de la dinámica socio-política del Estado. Este ha sido el caso de la reforma de las Haciendas Locales."

establecieron otros dos: ICIO e IIVTNU, además de las tasas y las contribuciones especiales.

La LRHL, que sólo introdujo un impuesto *ex novo*, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), procuró, sin embargo, una mayor simplificación al sistema fiscal, al suprimir un buen número de figuras exactoras que, salvo su larga tradición histórica poco aportaban a la bondad del mismo, ni procuraban recursos suficientes para recomendar su continuidad puesta en entredicho por el *principio de economicidad*. Además, procuró a los Ayuntamientos un mayor ejercicio del principio de autonomía al permitirles recoger en sus Ordenanzas fiscales la adecuación de las cuotas previstas de los impuestos a los gastos, mediante la graduación de las alícuotas a lo largo de los intervalos legales o corregir las cuotas, caso del IAE o del IVTM, que, por su común estructura próxima a las llamadas “cuotas fijas”, no contaban con base imponible ni, en consecuencia, con tipo de gravamen⁴.

Pero el objetivo de alcanzar la gran y definitiva reforma de la Hacienda municipal puede calificarse como de un intento frustrado. En primer lugar, porque se creó un sistema impositivo basado exclusivamente en impuestos reales o de producto, que por su propia naturaleza se asemejan a los históricos sustituidos, reuniendo los defectos y la estructura anacrónica de aquéllos, y, después, porque el pretendido alcance de la suficiencia financiera continuó siendo más una utopía que una realidad; a ello contribuyó, sin duda, el progresivo papel que en el ámbito del gasto municipal ha representado la asunción de nuevas competencias⁵ y la escasa evolución de los ingresos fiscales⁶.

⁴ En esta actuación reformista se abolieron del pasado, las Contribuciones territoriales, el Impuesto sobre Solares sin edificar, las Licencias Fiscales y el Impuesto de Radicación, el Impuesto sobre la Publicidad y el Impuesto sobre los Gastos Suntuarios, salvo la modalidad sobre cotos de caza y pesca, que aun perdura aunque de forma testimonial, por su escasa aplicación y capacidad recaudatoria.

⁵ Si hablamos de la participación relativa del gasto público nacional entre los distintos niveles públicos vemos como en 1987 la porción del gasto total nacional que correspondía a las corporaciones locales era el 14,5 % mientras que diez años más tarde, en 1998, era poco más del 15 %, este estancamiento del sector local habla por sí solo de papel secundario otorgado a las corporaciones locales en el ámbito de un proceso descentralizador efectivo pues lo prueba el crecimiento del papel representado por las Comunidades Autónomas que pasaron del 17,9 % al 27,9 % y ello pese a que todavía no se habían completado las transferencias de educación y sanidad. J. Miranda Hita (2001); p. 109.

⁶ Puede verse en el Cuadro 1, ANEXO de este trabajo, la registrada entre los años 2000 a 2006.

Una importante novedad que aportó la reforma, fue la creación de una nueva categoría jurídica: los *precios públicos*. Se instrumentaron a modo de prestación patrimonial con el objeto de aumentar la capacidad financiera de las administraciones públicas⁷. Esta novedad dio lugar a un trasvase de supuestos antes sometidos a la exigencia de tasas al campo de esta nueva categoría financiera de carácter no tributario, que sin embargo, no ha obtenido tanto fruto financiero como habría sido deseable por razones jurisprudenciales⁸.

La LRHL, a lo largo de los años siguientes, fue objeto de escasos cambios que, de manera puntual, intentaron dar solución a cuestiones singulares y que no supusieron modificaciones relevantes, ni generar mayores recursos con los que hacer frente al mayor volumen de competencias que la realidad exigía a las entidades locales⁹. La necesidad de afrontar una nueva reforma, por el contrario, se hacía más perentoria ante la conveniencia marcada por razones políticas de que los entes públicos, entre ellos los municipios, no aumentasen su nivel de endeudamiento incurriendo en un mayor déficit¹⁰, pauta recomendable que, más tarde, por exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se ha hecho de cumplimiento obligatorio.

⁷ Al exigirse por la utilización del dominio público, la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa, sin tener que respetar el principio de equivalencia respecto al coste, lo que conduciría a sobreelevar el importe de lo antes exigido mediante tasas y a obtener beneficios que sirvieran de financiación sobreañadida sin estar sometidos al *principio de reserva de Ley*

⁸ La prolijidad que en el establecimiento de precios públicos y en el comportamiento de las tasas tuvo lugar como consecuencia de la nueva regulación, sería objeto de interés para el Tribunal Constitucional que en Sentencia 185/1995, de 14 de diciembre, sobre inconstitucionalidad de determinadas modalidades de precios públicos, precisó la necesaria exigencia del principio de reserva de Ley, según dispone el artículo 31.1 de la CE, en todas las prestaciones patrimoniales de carácter público definidas por la nota de coactividad, lo que hizo necesario replantear el concepto de precio público. A esta misión se encomendó la Ley 25/1998, que ha dado como consecuencia una reducción en el ámbito de aplicación de los precios públicos y una ampliación en el correspondiente al de las tasas.

⁹ A pesar de su mala situación financiera la mayoría de los Ayuntamientos realizan funciones supletorias en competencias que no tienen, a las que no pueden sustraerse por la proximidad a la ciudadanía que el poder municipal tiene y que en la práctica se le reclama. Cómo no participar en servicios básicos como la educación primaria, la asistencia social, la vivienda, la inmigración, entre otros, aunque sólo les venga financiada la mitad del coste que a las arcas municipales les supone. Es evidente que la mayor atención municipal hacia los problemas ciudadanos exige no solo el traspaso de competencias sino, un importante traspaso de recursos desde el Estado y las Autonomías a la Hacienda municipal, en la actualidad insuficiente: en España los Ayuntamientos gestionan alrededor del 15 por 100 del gasto público, frente al 21 por 100 que es la media de los países de estructura federal consolidada.

¹⁰ Déficit debido a los escasos recursos financieros porque “los ayuntamientos democráticos renacían en unas difíciles condiciones financieras, abrumados por unas expectativas excesivas y con unas estructuras precarias, tanto en lo referente a las bases legales de actuación como en materia de personal cualificado para hacer frente a estas nuevas necesidades” en Suarez Pandiello, J (2000), p.208.

Durante la década de los noventa la potestad municipal para modular los tipos de gravamen y las cuotas fue empleada sin grandes excesos. Las moderadas decisiones municipales obedecieron posiblemente a razones de oportunidad política y de coste electoral, sin omitir que, en sentido contrario, las revisiones catastrales contribuyeron a mejorar la cifra de ingresos. La austeridad recaudatoria, resulta cuanto menos extraña, por la notable presión financiera con que los Ayuntamientos hubieron de vivir durante estos años. La citada moderación se observa en el estudio realizado por Suarez Pandiello respecto a las actuaciones en el año 1998 de las cincuenta y dos capitales de provincia¹¹.

La supresión parcial de la imposición sobre la actividad económica, especialmente para los pequeños contribuyentes, constituyó el principal desencadenante para afrontar la última reforma de la Hacienda local a través de la Ley 51/2002. Destaca entre los cambios que se mejoró el cumplimiento del principio de autonomía al aumentar la posible aplicación de ciertos beneficios fiscales que, en algunos casos, incorporan la posibilidad de considerar ciertos rasgos de personalización en los impuestos, de modo que la carga fiscal puede reducirse, si así lo acuerdan las Corporaciones municipales, en los casos de familias numerosas, viviendas protegidas, inmuebles en zonas de protección especial que reciben menores servicios o por causas medioambientales. Pero esta discrecionalidad tasada, si bien supone un avance en el desarrollo del principio de autonomía, actúa en contra de la deseable suficiencia financiera municipal, por corresponder al capítulo de reducciones de la deuda tributaria, y, a la vez, eleva considerablemente los costes de gestión tributaria.

¹¹ Cfr. Suarez Pandiello, J (2000), p.216. Se desprende de él, que en el caso del IAE, frente a la posibilidad de fijar un coeficiente máximo municipal medio del 1,853, la media del establecido alcanzó el 1,391, equivalente al 75,2 % del máximo; en el IVTM, la cuota máxima en las capitales para vehículos entre 8 y 12 CV era de 11.200 pesetas, y la media exigida fue de 7.629, el 68,6 % de la máxima; en el ICIO, el tipo máximo medio podía alcanzar el 3,831 % y se quedó en el 3,309 %, un 86,4 % del tipo máximo, mientras que en el IIVTNU el tipo medio efectivo fue del 26,717% cuando pudo aplicarse hasta el 29,596 %, quedando por ello en el 90,3% de su utilización. Es más amplio el conjunto que analizó la Dirección General del Catastro para los bienes urbanos en el IBI, y del que se desprende el dato de que la cuota íntegra del año 1999 cifrada en 614.494 millones de pesetas podría aumentar de fijarse los tipos máximos permitidos hasta la cantidad de 1.071.521 millones, es decir un 74,4 % más de lo obtenido; y, en un mayor espectro temporal, Miranda Hita(2001), precisa que “la cuota íntegra del IBI urbana para el conjunto de los municipios de régimen común ha permanecido durante los diez años analizados –se refiere a los que van de 1990 a 1999- en valores que se sitúan entre el 56 % y el 63,5% de su importe máximo posible”.

Tal proceso de escasa evolución del sistema fiscal municipal durante la democracia, no ha aportado la necesaria financiación, de ahí que desde los años inmediatos a la aprobación de la LRHL las Haciendas locales estén reclamando continuamente que el legislador afronte la reforma financiera, lo que no se ha hecho, al contrario, han sido muy frecuentes las actuaciones del legislador relativas al sistema fiscal estatal y a la reforma de la financiación autonómica. En la actualidad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está exigiendo a los poderes públicos que se afronte definitivamente la reforma del régimen de financiación de los municipios y provincias españoles, a la par que se negocia el de las CC AA, y, entre sus exigencias, plantea una mayor participación en el IRPF y en el IVA, a la vez que la creación de un fondo autonómico que financie los gastos que no les competen¹² y que pueda de una vez por todas alejarles de la ruina económica que se les pronostica¹³.

¹² *Cinco Días*, de 4 de junio de 2008, p.36. Diario *El Mundo*, de 29 de noviembre de 2008, p. 16 y sgte.

¹³ Bajo el título “La ruina acecha a los municipios” *El País*. Comunidad Valenciana de 12-5-2008, plantea la grave preocupación de los municipios de la Comunidad Valenciana ante la crisis del sector inmobiliario que les está obligando a tomar decisiones indeseadas de venta de suelo, a la vez que a exigir a la Administración estatal y autonómica solución a tan dramática situación que se presume va a seguir agravándose en el próximo futuro.

2. El estado actual de la fiscalidad local

Debemos considerar el conjunto de la Hacienda local y su fiscalidad, desde la perspectiva de las carencias y necesidades a las que se enfrenta el conjunto local, las crecientes exigencias que se plantean a los poderes públicos y la necesidad de que éstas sean atendidas por nuestras Corporaciones locales. Siguiendo un orden consecuente apuntaremos aquellos aspectos más relevantes de la realidad citada:

A - En el ámbito de las Haciendas locales, podemos destacar:

1.- Importante aumento de las competencias

a) Las competencias de los Ayuntamientos alicantinos, en identidad con las del resto de los municipios españoles, tienen un carácter universal¹⁴, porque sus actuaciones pueden referirse a todos los ámbitos de la esfera pública aunque estén atribuidos a otras Administraciones, siempre que su finalidad sea el beneficio o la satisfacción de las necesidades vecinales.

b) La realidad nos muestra la sobre dimensión y versatilidad en las competencias de las que se ocupan nuestras corporaciones desde la entrada de la democracia, y muy especialmente en los últimos años, afrontando tareas de la más diversa condición que no responden a las atribuciones que les han sido otorgadas por el legislativo; ejemplo de ello, entre otras, son la atención a la tercera edad y personas con minusvalía, acogida a inmigrantes, minorías étnicas, refugiados, exiliados, personas con cargas familiares no compartidas, escuelas infantiles, protección a mujeres maltratadas, reinserción social de alcoholólicos, ex reclusos, toxicómanos, acción social comunitaria y familiar, etc.

c) Dichas tareas responden a una demanda ciudadana a la que no pueden ni deben sustraerse nuestros municipios¹⁵.

d) Esta realidad está dissociada del actual marco legal: las ineludibles actuaciones no cuentan con el respaldo legislativo de atribución de mayores competencias, como debiera ser¹⁶.

¹⁴ Conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la Carta Europea de Autonomía Local, suscrita por España el 15/10/1985.

¹⁵ Sin lugar a dudas, el municipal es el nivel de gobierno más cercano al ciudadano y, en consecuencia, el portal de llamada al que primero acuden los necesitados, y como tal, al que se le exige y ha de servirles no como paño de lágrimas sino como solución y panacea para todos sus males.

e) Así las cosas, se hace imprescindible desarrollar a corto plazo una importante descentralización, en nuestro caso, desde la Comunidad Valenciana, para aumentar las competencias normativas y, a resultas de ello, mejorar la financiación de nuestros municipios. Debe ser el Estado quien deba favorecerla mediante su total apoyo al proceso de creación de la participación en ingresos de las CC AA (PICA)¹⁷, basado en el respeto a los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera¹⁸.

f) La situación descrita exige un crecimiento notable del gasto público local, acorde con la necesidad de converger hacia una más correcta descentralización del sector público en España¹⁹, y que posibilite el tremendo esfuerzo que se ha de realizar por los municipios y las provincias para atender del mejor modo posible esta realidad, sin contar a cambio con el peso relativo que les debiera corresponder respecto al resto de las Administraciones públicas (Utrilla de la Hoz, A, cuadro 14).

g) Entretanto no se realice, los municipios carecen de suficiencia financiera, sin la que no puede haber auténtica autonomía local, así que están sufriendo una verdadera asfixia económica²⁰, de la que es difícil salir, porque, no cabe el endeudamiento, al tener que responder, sin posible excusa, a la exigencia del principio de equilibrio presupuestario²¹.

¹⁶ Conforme a la STC 48/2004, FJ 11º, la imposición estatal o autonómica a las Entidades locales de financiar servicios públicos, respecto de las que carecen de competencia, supone la ruptura de la exigencia constitucional de que el gasto se destine, en todo caso, a financiar sus funciones o competencias, por lo que se vulnera la autonomía local garantizada en el art. 142 de la CE.

¹⁷ El artículo 142 de la CE precisa que “Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del estado y de las Comunidades Autónomas”.

¹⁸ El artículo 140 de la CE garantiza la autonomía de los municipios, y el artículo 142 la suficiencia financiera.

¹⁹ Se ha dicho con reiteración que una correcta distribución del gasto público en nuestro país supondría otorgar por el Estado un 33% a las CC AA y la misma cuantía a las HH LL. La realidad nos muestra que los verdaderos beneficiarios de la descentralización de poderes en España son las CC AA que han recibido su cuota de participación, no así la Hacienda local que sigue situada en torno a un 16% en el nivel de gasto público.

²⁰ Véanse las declaraciones del presidente de la FEMP en relación con la necesidad urgente de iniciar las negociaciones con el Gobierno central para acabar con dicha asfixia económica aprobada por unanimidad el pasado 27 de mayo. Diario *El País* de 28/5/2008.

²¹ El gasto público viene constreñido por el principio de estabilidad presupuestaria, que como objetivo se contiene en el Real decreto legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que en el capítulo III se refiere a la exigencia para las Entidades locales, y en el que sólo si se cumplen unas circunstancias muy especiales se contempla con carácter excepcional el déficit.

2.- Los determinantes de esta asfixia financiera pueden expresarse, en síntesis, así:

a) En materia de gasto *público*, cabe resaltar como más relevantes:

- El notable crecimiento de las necesidades ciudadanas.
- El consecuente desarrollo de la demanda de ayuda y de atenciones de auxilio a los municipios y, a resultas de ello, el de los gastos locales para resolverlos.
- El crecimiento en el ejercicio por las corporaciones locales de las *competencias impropias*, es decir, competencias que legalmente corresponden especialmente a las CC AA, y en ocasiones al Estado, y que éstas obligan a las entidades locales a atenderlas.
- Aumento de los costes de inversión, conservación y entretenimiento de los bienes y mobiliario público municipal.
- El crecimiento de las exenciones y beneficios fiscales de los impuestos municipales recogidas en el marco legal, que estarían justificadas si respondiesen a fines de interés general, pero no siempre es así, porque proceden de tiempos remotos, débil razón, de ahí que su mantenimiento implique la quiebra del *principio de generalidad tributaria*²².
- El *principio de lealtad institucional*²³ se está resintiendo porque el Estado y las CCAA deben considerarlo siempre a la hora de adoptar decisiones que afecten a las finanzas locales, y no siempre ocurre. En los últimos años, y, en particular con la reforma de la Ley 51/2002, se está incurriendo en una costumbre desfavorable para los municipios, al legislar un crecimiento en el número de los beneficios y deducciones fiscales, y aunque se les dé el carácter de potestativos, para así eludir la exigencia constitucional de prever la correspondiente partida compensatoria a favor

²² Recogido en el art. 31.1º de la CE, y que se fundamenta en similares términos en la STC 10/2005, FJ 6º.

²³ Implica, en el ámbito tributario, que debe compensarse a los Ayuntamientos por la pérdida de ingresos municipales derivada de la introducción de nuevas exenciones o bonificaciones tributarias obligatorias. Cualquier transferencia forzosa de recursos de una Hacienda territorial a otra, siempre que la misma no encuentre una habilitación expresa en el bloque de la constitucionalidad (STC 48/2004, FJ 12º) y sea impuesta unilateralmente por una de ellas, implica una ilegítima alteración de los ingresos o recursos financieros del Ente territorial al que se le impone.

de los que las aprueben²⁴, lo cierto es que dañan gravemente los intereses municipales.

- En general, se observa una tendencia creciente de los restantes elementos *determinantes* del gasto, y, además, un bajo grado de eficiencia y forma poco eficaz de atender la realización de muchas de las partidas de gasto municipal. Esta ausencia de buena gestión, que no es patrimonio exclusivo de este nivel de gobierno, sino de toda la administración democrática española, contribuye a elevar el nivel de insuficiencia financiera de los municipios²⁵.

b) En relación con el capítulo de *ingresos en general*, se puede destacar:

- El estancamiento en la financiación local, que desde la aprobación en el año 1988 de la LRHL no se ha visto mejorada, salvo con la negativa reforma²⁶ procurada con la Ley 51/2002 que ha representado una notable e inexplicable pérdida de ingresos para los municipios y la Diputación provincial²⁷.
- Es necesario poner de manifiesto la imposibilidad para los municipios de reformar su sistema fiscal por decisión propia, salvo posibilitar la inclusión de ciertas deducciones o ejercer el derecho a la fijación de los tipos impositivos, pero siempre dentro de los límites legales. Es así, porque, como se ha dicho, no existe un poder legislativo municipal, y, en todo caso, se está a expensas del poder delegado que le otorguen los niveles de gobierno superiores, es decir, principalmente el Estado²⁸, y también las CC AA²⁹.

²⁴ De este modo, si bien no se obliga a los municipios a su concesión, sí se les crea una situación difícil si renuncian a implantar alguna medida de bonificación fiscal que pudiera ser beneficiosa para él, y se origina una posición incómoda si en los términos municipales colindantes sí se aprobasen.

²⁵ Es evidente que la pequeña dimensión de ciertos municipios, su reducida base de población, puede imposibilitar el mejor desarrollo de las actuaciones y prestaciones de servicios públicos, por lo que para el logro de las condiciones mínimas de eficiencia debería ser suplido por cualquier entidad gestora superior o por la Diputación Provincial.

²⁶ Apenas si aportó más cambios que el del IAE, del que suprimió la obligación de pago para más del 85% de los contribuyentes.

²⁷ Debe tenerse en cuenta que el Recargo Provincial en el IAE es el único impuesto con el que cuentan las Diputaciones Provinciales.

²⁸ Conforme al artículo 133.1 de la CE el poder tributario originario corresponde en exclusiva al Estado.

²⁹ La capacidad normativa de las CC AA debería responder a la asunción de competencias que en el ámbito de sus Estatutos contienen. En el caso de la Generalitat Valenciana, en el artículo 63.2 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, se dice que “Les Corts impulsarán la autonomía local, pudiendo delegar la ejecución de las funciones y competencias en aquellos Ayuntamientos y entes locales supramunicipales que, por sus medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios.

- El *sistema fiscal* de los municipios alicantinos no contiene influencias medioambientales: no se exigen impuestos de esta naturaleza, ni tampoco se han arbitrados factores correctores de cuota a los tributos existentes para castigar o beneficiar la incidencia favorable o negativa sobre el medioambiente.
- Otro capítulo de ingresos corresponde a las *transferencias*; en este sentido, nuestros municipios, como el resto de los españoles, obtienen del Estado un importante volumen de recursos con carácter incondicional, aunque sus cuantías vienen fijadas mediante la petrificada fórmula de cálculo establecida para la *participación en los ingresos del Estado* (PIE), en la que la dotación de la cuantía total a distribuir es escasa y los indicadores de reparto reglados no son las mejores, especialmente el del esfuerzo fiscal que resulta confuso e inoperante, de ahí que estén siendo muy contestados por su fuerte inequidad³⁰.
- En cuanto a la *participación en los ingresos de las CC AA* (PICA), la realidad nos muestra que la Generalitat Valenciana apenas si atiende la exigencia constitucional³¹ y la nimia actitud de cooperación que mantiene respecto a sus entes locales, es menor que la ya de por sí escasa aportación que tienen las demás CC AA para con sus municipios (cuadro 2). Esta vía constitucional, salvo algunas excepciones, se mantiene inédita, ya que las subvenciones y ayudas prestadas por las CC AA a los municipios son escasas o inexistentes³². Además, cuando las hay, son de

La distribución de las responsabilidades administrativas entre las diversas administraciones locales ha de tener en cuenta su capacidad de gestión y se rige por el principio de subsidiariedad, de acuerdo con lo que establece la Carta europea de la autonomía local y por el principio de diferenciación, de acuerdo con las características que presenta la realidad municipal.

Mediante ley de Les Corts se procederá a la descentralización en favor de los Ayuntamientos de aquellas competencias que sean susceptibles de ello, atendiendo a la capacidad de gestión de los mismos. Esta descentralización irá acompañada de los suficientes recursos económicos para que sea efectiva.

3. Para potenciar la autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad, por Ley de Les Corts, se creará el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana con los mismos criterios que el fondo estatal.

³⁰ Cfr. PEDRAJA CHAPARRO, F. y SUAREZ PANDIELLO, J.: “Reformar la PIE ¿Misión imposible?”, Papeles de Economía Española, nº 115/2008, págs. 152 a 165.

³¹ A modo de ejemplo, respecto a los planes de cooperación, en materia de fondos de cooperación local, que tienen como objetivo el apoyo a la financiación de los gastos corrientes de las entidades locales para contribuir al logro del principio de suficiencia financiera, en el ejercicio 2007, la Comunidad Valenciana al contrario que el resto de Comunidades Autónomas no ha emprendido ningún Plan de cooperación. Vid. TOBES PORTILLO, P. y ANGOITIA GRIJALBA, M. “La inversión en los Planes Autonómicos de Cooperación Local” en Papeles de Economía Española, número 115/2008, cuadro 1, pág. 177.

³² Del análisis comparativo de los sistemas de transferencias por CC AA que realizan PEDRAJA CHAPARRO, F. y CORDERO FERRERA, JM, (Cuadros 3 y 4) la Comunidad Valenciana sale muy mal parada ya que es la

carácter finalista lo que atenta contra el principio de autonomía local y sitúa a los ayuntamientos en una posición manifiesta de insuficiencia financiera.

c) En lo relativo a la materia fiscal

- El *esfuerzo fiscal* que se atribuye a los municipios alicantinos, no es de los más relevantes en términos comparativos³³, y aunque no alcanza el límite legal superior, es muy difícil de conducirlo al alza. Para el conjunto nacional se acompañan en el anexo los cuadros 8 a 13, que han sido elaborados por Suárez Pandiello y Fernández Llera (2008).

En el ámbito de la Comunidad valenciana se soporta una presión fiscal municipal superior a la de la media del conjunto del país. En porcentaje del PIB fue en el año 2003 de 1,3 frente al 1,06 del total de las CC AA. (Cuadro 5) porque la adopción de medidas favorables para una mejora de los ingresos tendría una inmediata respuesta ciudadana en su contra³⁴.

- El sistema fiscal municipal pese a gozar de la ventaja de aceptación y corresponsabilidad que le proporciona su elevada tradición histórica es ancestral, tosco y de estructura rígida: es el resultado de la integración y escasa evolución de los viejos impuestos que, en general, actúan extrarradio de los mejores índices de capacidad económica.
- La comparación de la recaudación por habitante, presión fiscal y esfuerzo fiscal, se observa que no es excesiva en los dos principales municipios alicantinos, especialmente si se compara con los datos del nivel superior del estudio que lo ofrece el municipio de Jerez de la Frontera, pero es

única, con Asturias, de entre las 14 que figuran en el cuadro comparativo, de la que se dice que “no existe un instrumento específico de cooperación”. Cfr. “Sobre las participaciones locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas”. Papeles de Economía Española, núm. 115/2008, cuadro 1, págs. 183 a 185. Asimismo, los citados autores muestran en el cuadro 2 del artículo citado, respecto al año 2008, que la Comunidad Valenciana ha previsto en su Presupuesto un importe cero como volumen de transferencias incondicionadas a los entes locales, pág. 185.

³³ Como se recoge en Suárez Pandiello, J. y Fernández Llera, R. (2008), p. 194.

³⁴ Un crecimiento del esfuerzo fiscal se permitiría en casi todos los tributos locales, elevando dentro del margen legal los elementos determinantes de la carga fiscal: bases imponibles, tipos de gravamen, o reduciendo los beneficios fiscales: exenciones o deducciones. Sin embargo la sensibilidad social respecto a los impuestos locales es absoluta, basta recordar los problemas derivados del llamado “catastrazo” cuyos efectos todavía perduran, como se ha visto, más recientemente, con las revisiones catastrales, que han puesto en “pie de guerra” a municipios como el de Javea. Es, además, una pauta común, recuérdense las manifestaciones populares en Salamanca, etc. y es que los impuestos municipales no cuentan con el *efecto anestesia* de venir incluidos/enmascarados en el precio de los productos, como ocurre con los impuestos indirectos, ni de las retenciones, pagos a cuenta, etc. que tanto favorecen la recaudación indolora en los impuestos directos estatales.

relevante que sí superen a las de Valencia o Madrid. Su estimación, aplicando el principio del beneficio, para los municipios de más de 75.000 habitantes y capitales de provincia y/o de CC AA nos ofrece el siguiente cuadro:

	Recaudación por habitante	Presión fiscal	Esfuerzo fiscal
Alicante	68	82	99
Elche	82	95	110
Valencia	59	60	61
Castellón	108	111	114
Jerez	222	282	351
Madrid	84	67	62
Barcelona	116	93	84

Si el análisis del esfuerzo fiscal, exclusivamente, se hace en relación con los ingresos por habitante, nivel de renta y base imponible en el IRPF, los resultados que muestra esta variable son:

	EF Ingresos por habitante	EF Ingresos por renta	EF Ingresos por BI del IRPF
Alicante	61	68	61
Elche	74	79	126
Valencia	54	50	42
Castellón	98	93	79
Jerez	222	282	351
Madrid	76	56	47
Barcelona	105	78	64

- En cuanto a la distribución porcentual de los ingresos municipales con capacidad normativa, según la muestra seleccionada -municipios españoles con más de 75.000 habitantes y capitales de provincia y de CC AA- se observa que la mayor recaudación, coincidiendo con la media global, se obtiene por el IBI, seguido por el conjunto que representan las Tasas, precios públicos y contribuciones especiales, guardando los

demás impuestos una gran semejanza recaudatoria³⁵, según se extrae del cuadro siguiente, elaborado a partir del trabajo ya citado³⁶:

	IBI	IVTM	IIVTNU	IAE	ICIO	TASAS, PP YCE	TOTAL
Alicante	45,0	10,6	8,1	9,9	10,5	15,9	100
Elche	37,6	15,4	6,4	8,9	10,8	21,0	100
Media global	37,9	12,0	9,1	8,5	8,5	24,0	100

- Los impuestos *voluntarios*, es decir aquellos cuya exigencia por el municipio exactor es potestativa, dejan en la práctica de serlo, porque las necesidades financieras hacen que se apliquen, en general, en todo el territorio nacional³⁷, y, asimismo, en la provincia de Alicante.
- Se desprende del sistema tributario la conclusión de que los recursos fiscales mantienen una excesiva dependencia del sector inmobiliario, por lo que, además de su influencia en elevar el coste de los inmuebles por razones fiscales, en las épocas de desaceleración económica y de crisis se genera un riesgo de retroceso financiero, que pone en serio peligro el funcionamiento económico local³⁸.
- De los cinco impuestos municipales³⁹ cabe destacar, corroborando lo dicho, que tres de ellos gravan exclusivamente la fuente inmobiliaria –IBI, ICIO e IIVTNU–, un cuarte, el IAE, aunque grava a todas las actividades económicas, lo hace con especial agravio sobre las inmobiliarias, ya que

³⁵ Puede observarse la importante pérdida que ha sufrido el IAE tras la reforma de la Ley 51/2003, ya que de ocupar el segundo lugar en recaudación ha pasado casi al último.

³⁶ Suarez Pandiello, J. y Fernández LLera, R (2008).

³⁷ Es cierto que el número de municipios que no los aplican no es bajo, pero el pequeño tamaño en número de habitantes de ellos permite afirmar que son de aplicación bastante general. Así, el *Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras* (ICIO), pese a su condición de impuesto no obligatorio, se extiende a más de las tres cuartas partes de las poblaciones españolas y aunque el nivel de exigencia del Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) es más pequeño, lo cierto y verdad es que se exige en la práctica, en todos los municipios de mediano y gran tamaño, quedando excluido, en general, sólo en los de reducida base de población.

³⁸ Bajo el titular “La falta de fondos lleva a 13 municipios de Alicante a impulsar revisiones catastrales en tan solo un año”. Diario El Mundo 30/3/2008, pp. de Alicante 1 y 3, se daba cumplida información del endémico problema de la financiación municipal que ha motivado tal decisión en los municipios de El Campello, Teulada, Crevillent, Callosa d’En Sarriá, Almoradí, Onil, Pedreguer, Beniardá, Beniarres, Bolilla, La Vall de Laguar, Sagra, Tormos y Pego, a los que habría que añadir el caso de Xabia, cuya Ponencia podría sufrir cambios tras ser anulada por el Tribunal Superior de Justicia.

³⁹ Desestimamos incluir en este análisis el reducto impositivo que del Impuesto sobre Gastos Suntuarios sigue vigente: el relativo al gravamen sobre Cotos de Caza y pesca, por su escasa capacidad recaudatoria y práctica inexistencia en la provincia de Alicante.

grava a la construcción y, separadamente, a la promoción y venta de edificaciones, y ,sobre esta última, aplica un doble criterio de fiscalidad: una cuota fija y, lo que es una excepción, una cuota variable sobre el total de metros cuadrados de superficie vendida o por vender. También grava el arrendamiento de inmuebles. De modo que sólo el IVTM deja de gravar a los inmuebles. Añádase a ello la exigida Tasa municipal por licencia de obras, y demás tasas y arbitrios municipales, sin omitir que sobre el sector recae con especial énfasis la fiscalidad estatal y autonómica, así que el resumen del análisis conjunto deja en evidencia la escasa neutralidad con que el sistema fiscal integral de nuestro país trata a los inmuebles.

3.- Si nos situamos en concreto en el espacio tributario existen graves problemas por razones de índole estructural.

Respecto a los impuestos locales:

a) En el *Impuesto sobre Bienes Inmuebles*, se identifica a la base imponible con el valor catastral. Es un grave error, porque el valor catastral, no está cumpliendo cabalmente su función de medición de la capacidad económica derivada de la propiedad inmueble: las revisiones catastrales, son lentas y muy dilatadas en el tiempo, no han alcanzado una cadencia suficiente y, además, hay una alta contestación ciudadana a su realización⁴⁰. En resumen, el impuesto más importante en nuestros municipios, como en el resto del país, es muy inelástico en la determinación de las bases y no se muestra propicio para favorecer la elevación de los tipos impositivos.

b) El *Impuesto sobre Actividades Económicas* es un activo irrenunciable, porque diversifica las fuentes de gravamen con un adecuado nivel de perceptibilidad o corresponsabilidad fiscal, ya que sus antecedentes históricos datan de hace dos siglos. Sin embargo, la obsesión por su reforma, condujo al desacierto de la Ley 51/2002, al dar paso a una figura discriminatoria e injusta, que declara exentas a todas las personas físicas -por elevada que sea su capacidad económica- y somete sólo a gravamen a las sociedades que superen una determinada cifra de negocios.

⁴⁰ Ello pese a que quedan en gran parte neutralizadas por la reducción decenal introducida por la Ley 53/1997, cuando no por la propia evolución del mercado inmobiliario, o por la capacidad municipal de limitar el crecimiento de las cuotas.

Por el contrario, a las personas físicas no residentes no se les extiende la exención general, lo que supone una discriminación contraria al Derecho Comunitario.

El concepto de “importe neto de la cifra de negocios” elegido como indicador de capacidad económica, es una pésima opción, porque se puede tener grandes pérdidas con alta cifra de negocios y amplio beneficio con cifras más reducidas, lo que es injusto para los titulares de negocios.

c) En relación con el *Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica*, grava también otra manifestación de capacidad económica diferente de los inmuebles, completando así el trípode impositivo que caracteriza al modelo latino⁴¹. Pero no grava el valor de los vehículos, sino su potencia, capacidad de carga o número de plazas, ni su contribución al empeoramiento medioambiental; tampoco favorece la descongestión del tráfico rodado en las ciudades, y está produciendo el efecto perverso de la deslocalización de los vehículos con el objetivo de pagar cuotas más bajas, al emplear como medio elusor la domiciliación fiscal de las empresas en los municipios con menor presión fiscal en este impuesto⁴².

d) El ICIO, es un impuesto potestativo indirecto que grava las construcciones, instalaciones y obras, y cuya exigencia es compatible con la tasa municipal por licencia urbanística. Desde la perspectiva legal no se produce coincidencia de hechos imponible, pero la coexistencia de ambos tributos, en el mismo municipio y sobre las mismas obras, origina una clara sobre imposición inmobiliaria que contribuye a incrementar el coste de los inmuebles.

Su hecho imponible plantea situaciones de no sujeción discriminatorias y que perjudican a la financiación municipal, porque no se someten a gravamen las obras que no exigen licencia municipal, o las que exigiéndola no compete su concesión al Ayuntamiento exactor. Así que no se grava, entre otros, a los proyectos de urbanización, las obras de interés público y ordenación del territorio, las de puertos,

⁴¹ En él, los impuestos municipales recaen sobre varias fuentes, en nuestro caso, inmuebles, actividades económicas y vehículos, frente al modelo anglosajón que circunscribe la fiscalidad local al gravamen inmobiliario en el que tiene el gran protagonismo, dejando en meramente testimonial los ingresos en beneficio de las demás Haciendas: estatal y regional.

⁴² Especialmente por las empresas de alquiler de vehículos o de enseñanza de conductores. Denuncia BALLARÍN ESPUÑA, M., a propósito de ello, y aunque es en una población de Cataluña de 224 habitantes, que cuenta con 15.073 vehículos “empadronados”, es decir, una media de 67,2 vehículos por habitante.

aeropuertos y zonas anexas, las de instalaciones ferroviarias y, en general, las obras de infraestructura pública emprendidas por el Estado o por las CC AA.

e) La exigencia del IIVTNU, o impuesto de plusvalía municipal, en un buen número de poblaciones⁴³ es un claro ejemplo de doble imposición, porque las plusvalías obtenidas por la transmisión de los bienes inmuebles ya se gravan en el correspondiente impuesto sobre la renta-IRPF, IS o IRNR, sin que alivie esta duplicidad el hecho de que en él sólo se grave la plusvalía del suelo⁴⁴. Agrava la situación, la forma de calcular la plusvalía, mediante una ficción que lleva a un valor administrativo, extramuros a la realidad, que siempre da positivo, y obliga a pagar el impuesto al transmitente, aunque su ganancia sea inferior a la estimada, o aunque no exista, porque de la venta se hayan derivado pérdidas.

- *En relación con las tasas:*

a) Es importante que los municipios alicantinos empleen para la financiación del coste de ciertos servicios esta modalidad de tributo basada en el principio del beneficio⁴⁵. Su utilización, respecto a aquellos servicios en los que no existan razones redistributivas, permite hacer frente a los gastos que ocasiona su prestación, vertiendo sobre los usuarios o beneficiarios el coste del servicio y evitando su abusivo consumo o innecesaria demanda que, de este modo, se racionaliza.

b) En general, la exigencia de tasas por concesión de licencias para actividades perjudiciales al medioambiente se limita a cubrir el coste financiero, lo que consideramos insuficiente, porque además del coste administrativo de la concesión, debe considerarse el grave perjuicio medioambiental que se produce con el ejercicio de la actividad.

⁴³ Este impuesto, en general, se exigía, en general, en las poblaciones de tamaño medio y grande, no así en las de pequeña base de población en las que el número de transmisiones es insignificante y excusaba la complejidad de su liquidación. Sin embargo, la precaria situación financiera municipal ha hecho que se amplíe su ámbito de aplicación y en la actualidad son 127 municipios los que lo exigen en la provincia de Alicante, lo que representa un 90 %.

⁴⁴ Ello pese a que es el único de los impuestos municipales que cuenta con el respaldo constitucional, art. 47, al decir que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística propia.

⁴⁵ El 43% de los ingresos municipales de fuentes propias está basado en el principio del beneficio.

- En cuanto a las *contribuciones especiales*, como tercera y última de las categorías tributarias, debe destacarse:

a) Que su empleo para financiar parte del coste de las inversiones y ciertos servicios locales ha caído en desuso en los últimos años ⁴⁶ (cuadro 7) perjudicándose uno de los tres instrumentos coactivos financieros. La causa debe atribuirse a su conflictividad, a las dificultades de la gestión tributaria y a las añadidas que genera en el pago cuando existen problemas de liquidez en los contribuyentes afectados.

b) Que se hace necesario rehabilitar esta figura tributaria⁴⁷. En este sentido la FEMP aboga “que se hace necesario estudiar una mejor clarificación de esta figura tributaria para posibilitar su implantación. Debe rehabilitarse (...) haciendo llegar a la conciencia de la gente la necesidad de que la financiación extraordinaria sólo puede abordarse mediante este tipo de derramas”. Como precisan Suárez y Fernández (2008)⁴⁸, debería convertirse en una especie de tributo *pigouviano* con cierto componente sancionador si se implicase a los causantes de ciertos gastos su financiación.

- En cuanto a los *precios públicos* o prestaciones patrimoniales de carácter público, que están previstas en el art. 31.3º de la CE, cabe afirmar que no están suficientemente desarrollados en el ámbito local, como instrumentos al servicio no sólo de la suficiencia financiera, sino, también, de la autonomía local y habría que incrementar su uso.

B.- DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Es indiscutible la diversidad del tejido empresarial de la provincia de Alicante, en el que concurren con posición protagonista multitud de actividades económicas desempeñando el empresariado un papel ejemplar, de modo que la política fiscal

⁴⁶ El protagonismo de las Contribuciones especiales municipales en el conjunto nacional no llega a alcanzar siquiera el 1% de los ingresos totales municipales y presenta una tendencia decreciente. Como puede verse en el cuadro 7, según las liquidaciones de Presupuestos de las Entidades locales, elaborada por el MEH, en el año 1992 alcanzaron 250 millones de euros, el 0,84% del total de sus ingresos, mientras que en el año 2004, no llegaron a recaudar los 170 millones, lo que supuso el 0,58% de los ingresos.

⁴⁷ Como considera la Comisión para el Estudio y Propuesta de medidas para la reforma de la Financiación de las Haciendas locales (2002)

⁴⁸ Vid. Pág. 199.

sobre las actividades económicas puede incidir de forma muy especial en el desarrollo y el progreso económico de nuestra provincia.

Dentro de la realidad actual se deben destacar algunos aspectos determinantes de la fiscalidad sobre la actividad económica, partiendo del hecho de que la mayoría de las empresas alicantinas pueden ser calificadas de PYMES, existiendo también un alto número de empresas familiares, y que, en general, las operaciones de comercio internacional, especialmente las exportaciones tienen un alto protagonismo.

- La *fiscalidad estatal* ofrece en la actualidad unas singularidades de tratamiento fiscal favorecedoras que se circunscriben al ámbito de este tejido empresarial y que, entre otros, viene referido a:
 - a) En el IRPF, para empresarios individuales el cálculo de los rendimientos de las actividades económicas se suele realizar mediante la aplicación del método de estimación objetiva, frente al cálculo más real y efectivo de la estimación directa.
 - b) En el Impuesto sobre Sociedades, es de aplicación mayoritaria a las entidades alicantinas el *Régimen especial para las empresas de reducida dimensión*, con importantes beneficios fiscales en materia de amortizaciones, provisiones, deducción por inversiones y con tipos impositivos más suaves, el 25% en vez del 30%. Asimismo existen importantes beneficios fiscales en los supuestos de fusión, absorción y escisión de sociedades, contemplados el particular *régimen especial*.
 - c) En el IVA, los empresarios personas físicas pueden acogerse al *régimen simplificado* para la estimación de las cuotas a ingresar, que, como en los casos anteriores, representa un mejor trato fiscal y el beneficio añadido del ahorro de ciertos costes administrativos. También el régimen especial del *recargo de equivalencia* representa un trato favorable para los comerciantes minoristas personas físicas.
 - d) El tipo general del IVA, es uno de los más bajos de la UE, porque se mantiene en el estrato inferior de la horquilla legal fijada para sus países miembros⁴⁹.

⁴⁹ El IVA es un impuesto absolutamente armonizado en el ámbito comunitario, por lo que las decisiones en torno a él no pueden atentar contra las normas de obligado cumplimiento, especialmente la VI Directiva.

En efecto, como puede verse en el cuadro adjunto, según la fiscalidad vigente al 1 de enero de 2008, en nuestro país se aplican unos tipos impositivos muy bajos en relación con los que se exigen en el resto de los Estados miembros:

Estados miembros	Tipos impositivos IVA en %	
	Tipo general	Tipos reducidos
Alemania	19	7
Austria	20	10 y 12
Bélgica	21	6 y 12
Bulgaria	20	7
Chequia	19	9
Chipre	15	5 y 8
Dinamarca	25	-
Eslovaquia	19	10
Eslovenia	20	8,5
España	16	4 y 7
Estonia	18	5
Finlandia	22	8 y 17
Francia	19,6	2,1 y 5,5
Grecia	19	4,5 y 9
Holanda	19	6
Hungría	20	5
Irlanda	21	4,8 y 13,5
Italia	20	4 y 10
Letonia	18	5
Lituania	18	5 y 9
Luxemburgo	15	3,6 y 12
Malta	18	5
Polonia	22	3 y 7
Portugal	21	5 y 12
Reino Unido ⁵⁰	17,5	5
Rumania	19	9
Suecia	25	6 y 12

- e) En el IAE, desde el año 2003 se contiene la exención plena e indefinida para los empresarios y profesionales personas físicas, y para las entidades jurídicas que tengan una cifra de negocios inferior al millón de euros.

⁵⁰ En el mes de noviembre y como medida de estímulo a la demanda y lucha contra la crisis económica se ha aprobado su reducción al 15%.

- f) En el *Impuesto sobre el Patrimonio*, se contempla la singular exención para el conjunto del patrimonio empresarial, y, en caso de empresas societarias, de los valores representativos del mismo bajo el cumplimiento de ciertos requisitos⁵¹.
- g) En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se contienen altos beneficios fiscales para las transmisiones *inter vivos* y *mortis causa* del patrimonio empresarial o profesional a los herederos o familiares con un grado próximo de consanguinidad, lo que contribuye a favorecer la continuidad del negocio o profesión familiar.

También cabe plantearse en el contexto del sistema tributario español, qué aspectos resultan menos favorables para el conjunto empresarial de la economía alicantina:

a) Sin duda hay que poner especial énfasis en el alto coste que representan para nuestras empresas las *cotizaciones sociales*, como un impuesto sobre el empleo⁵² que en realidad son, porque los tipos aplicables de la Seguridad social son muy elevados en España y, en términos reales, superan con creces a la media de carga fiscal de los restantes países miembros de la Unión Europea y del resto del mundo, mientras que, como se ha visto el tipo general del IVA es uno de los más bajos de la UE, salvo en el caso de Chipre y Luxemburgo que aplican el 15%, y el Reino Unido desde noviembre de 2008. Esta conjunción perjudica notablemente a las empresas exportadoras porque los productos cruzan la frontera desprovistos de costes fiscales indirectos (IVA) pero con la carga de los directos (cotizaciones sociales) y a la vez beneficia a las empresas extranjeras cuyos productos se introducen en nuestro país con costes fiscales directos más reducidos, en una especie de *dumping* encubierto y discriminatorio para nuestras empresas exportadoras.

b) Los tipos de gravamen en el *Impuesto sobre Sociedades* quedan situados por encima de la media del resto de los países occidentales suponiendo un perjuicio

⁵¹ Aunque el Impuesto sobre el Patrimonio no se exigirá a partir de este año.

⁵² Este problema no deja, por el hecho de ser general en el contexto nacional, de perjudicar al empresariado alicantino.

para la instalación de empresas en nuestro país y una situación discriminatoria en el ámbito internacional.

c) A mayor abundamiento, el régimen transitorio establecido para la supresión de las deducciones en el IS, hace que, en general, se estén reduciendo los porcentajes de bonificación, y a partir del año 2011 vayan a quedar eliminadas las principales deducciones y bonificaciones en la cuota del impuesto por incentivar determinadas actividades: I+D, Innovación tecnológica, por actividades de exportación, Fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación, de apoyo al transporte, por inversiones medioambientales, etc. Ello va a suponer a corto plazo un grave perjuicio para el desarrollo económico, para la inversión y, en consecuencia, para la creación de puestos de trabajo, más grave si cabe en la situación de recesión actual en la que se hace imprescindible fomentar el apoyo inversor de nuestras empresas.

d) Asimismo, se está anunciando, como parte de las medidas adoptadas en la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la reducción progresiva del ámbito de aplicación del régimen de estimación objetiva para las empresas en el IRPF y del régimen simplificado en el IVA, lo que redundará en un mayor coste fiscal para las empresas alicantinas, además del coste mayor indirecto que supondrá la llevanza de contabilidades y la realización de mayores gastos administrativos.

PROPUESTAS O MEDIDAS DE REFORMA

En relación con lo expuesto en las páginas anteriores y, atendiendo a los aspectos hacendísticos comentados es necesario impulsar las medidas necesarias para que los poderes públicos actúen en relación con las siguientes materias:

1.- En orden a favorecer la financiación local no tributaria

- Es necesario plantearse la urgente necesidad de resolver los problemas de saneamiento financiero que aquejan a los ayuntamientos, especialmente a los de pequeña dimensión.
- A corto plazo se necesita reforzar la aportación del Estado para políticas estratégicas, tales como la inmigración, el transporte urbano –que debe alcanzar a todos los municipios metropolitanos, con independencia de su población- y la política de vivienda.

- En materia de PIE debería plantearse a la Federación española de Municipios y Provincias y al Ministerio de Economía y Hacienda, la necesidad de modificar los criterios de distribución, elevando la cuantía total a distribuir y empleando con mayor relevancia el indicador del número de habitantes de cada municipio. Asimismo, es necesario generalizar la cesión de un porcentaje a determinar del IRPF -basando el indicador en la residencia- y del IVA –atendiendo al indicador de consumo local- para todos los municipios cuya población sea superior a 20.000 habitantes, y sin perjuicio de instaurar una transferencia de nivelación sobre la base de los criterios de necesidad y capacidad fiscal.
- Debe exigirse a los gobernantes de la Comunidad Valenciana que pongan en funcionamiento el apoyo financiero local por medio de las PICA, como instrumentos incondicionales de financiación, y que contribuya, junto con las PIE, al logro de la suficiencia por los entes locales.

2.- Respecto a los objetivos fiscales, cabe apuntar la necesidad de favorecer:

- La aplicación de medidas *impositivas medioambientales*, pues aunque en el área local no parece aconsejable la implantación de impuestos medioambientales⁵³ si podrían establecerse en los tributos actuales(,) ciertos correctores medioambientales que sobreeleven las cuotas que a modo de tasas se exigen en casos de excesivo consumo de agua, o en la aplicación del canon de tratamiento de residuos, por ejemplo. En igual sentido las tasas exigibles por autorización de actividades contaminantes deben no solo cubrir el coste administrativo de la licencia, sino también el daño causado al medioambiente por el desarrollo de estas actividades.
- En el *IBI*, la base imponible debe desvincularse del valor catastral, y optar por valores de referencia de mercado con la ayuda de los avances informáticos, y del Observatorio nacional de valores de mercado, que sirve para que los inmuebles de todo el territorio nacional estén permanente valorados con un mismo año de referencia, sin que se produzcan inequidades y sin que ello deba suponer un incremento de la presión fiscal, sino que sirva de referencia

⁵³ Por la evidente dificultad que podría generar su implantación y gestión, sin que, a cambio, se estime que tengan un efecto disuasorio ni una mejora recaudatoria que compense el esfuerzo que supondría su implantación.

a los Ayuntamientos para que éstos, en el ejercicio de su autonomía, puedan fijar las bases impositivas como un porcentaje de tales valores, dentro del intervalo legal que fije el legislador.

Deberían poderse aplicar tipos de gravamen diferenciados por usos, sin límite porcentual alguno, que permitan tener una fiscalidad más moderada para los inmuebles destinados a vivienda habitual, más débil si cabe para las VPO y más acentuada para los bienes inmuebles con destinos menos sociales y deseables.

A corto plazo y como medida de apoyo coyuntural, convendría influir sobre el legislador, igualmente, para que el tiempo de tres años pase a ser de cinco, respecto a la bonificación temporal que se aplica a las empresas promotoras y constructoras, sobre los inmuebles que están formando parte de su activo circulante por estar pendientes de venta.

Es necesario eliminar el *Recargo para los inmuebles de uso residencial – viviendas- en permanente desocupación*, que actualmente no es exigible por falta de su desarrollo reglamentario, pero que constituye una fuente estéril de ingresos y si de preocupación ciudadana.

- En el IAE se hace necesaria su urgente reforma, para potenciar la equidad tributaria, la actividad económica y el rendimiento mismo del tributo. Tanto desde el punto de vista del cumplimiento del principio de neutralidad, favoreciendo la libre competencia, como para evitar la injusta interferencia en la forma jurídica adoptada por los empresarios o profesionales para el ejercicio de su actividad.

En resumen se debe actuar con especial premura para suprimir sus graves defectos, y, en este sentido, se debería:

- Cambiar el criterio de selección de exenciones, sustituyendo la cifra de negocios por el rendimiento obtenido en el ejercicio de la actividad económica.
- Establecer un mínimo que mantuviese exentos a los modestos.
- Modificar y actualizar las tarifas por anacrónicas.
- Reincorporar a la tributación a los profesionales y artistas que obtengan altos rendimientos.
- Recuperar la excelente labor censal que cumplía el IAE.

- En cuanto al *IVTM*, se sugiere como línea de reforma fiscal más aconsejable:
 - Que las Tarifas deberían considerar de forma específica la categoría de vehículos mixtos o todo terrenos.
 - Preferentemente se debería corregir las cuotas en función de su incidencia medioambiental, y del mayor o menor uso del vehículo⁵⁴.
 - Impedir la deslocalización del impuesto para lograr el pago de menores cuotas.

- En relación con el *ICIO*, es aconsejable que:
 - El hecho imponible debería incorporar la realización de todas las obras, construcciones o instalaciones, con independencia de que estén sometidas o no a licencia municipal, o exista solicitud o concesión de ésta.
 - También en los supuestos en los que baste la previa comunicación de la realización de la construcción, instalación u obra.
 - El devengo debería postergarse a la terminación de la obra y no al inicio, cuando todavía, no se ha culminado la realización del hecho imponible, y ello sin perjuicio de que con el comienzo de la obra se exija por el municipio exactor un importante pago a cuenta.
 - En los municipios que exijan el *ICIO*, prácticamente todos, se debería suprimir la tasa por Licencia de Obras, con el objetivo de no sobrecargar fiscalmente a las construcciones. Si ello no se lograra, al menos sí debería contemplarse para las viviendas.

- Respecto al *IIVTNU* el legislador debiera considerar:
 - La necesidad de suprimir el criterio objetivo y modular, basado en el valor catastral, para estimar la plusvalía, porque dicha ficción es ajena a la realidad y contraria a la verdadera capacidad económica, por ello, debe establecerse el valor efectivo que resulte por la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición haciendo intervenir, para no gravar la inflación, a los índices correctores de la misma.

⁵⁴ Siendo conscientes de la dificultad que ello comporta, habría de intentarse para favorecer el tráfico urbano, quizá mediante la reducción del impuesto si fuese posible el control de uso de vehículos en días alternativos o de forma exclusiva para los fines de semana, que se podría instrumentar por medio de códigos en la matrícula.

- Deberían reducirse los elevados tipos de gravamen que se aplican, fundamentados en la infravaloración de la base imponible que viene determinada, en general, por el empleo de valores catastrales tan alejados de la realidad del mercado.
- Debería incorporarse entre los supuestos de sujeción a las plusvalías obtenidas en un plazo inferior al año, actualmente no sujetas, porque, en general, son supuestos en los que se genera una mayor especulación, y, además, con la reforma del IRPF, a las plusvalías por tan corto espacio temporal ya no se les aplica la tarifa progresiva sino el tipo único del 18%, que sin duda en el pasado contribuyó a facilitar el injusto beneficio fiscal que en la actualidad reciben.
- La conveniencia de integrar este impuesto en el correspondiente impuesto sobre la renta, permitiendo la deducción, de la cuota de éste, lo pagado al municipio, con lo que se anularía el efecto de la doble imposición.

3.- En materia de tasas se observa la necesidad de:

- Mejorar su empleo, especialmente en aquellas que se presten a los estratos poblacionales menos necesitados y en los municipios de mayor tamaño que, en general, son los que hacen un menor uso de ellas.
 - La concesión de autorización municipal o provincial para la realización de ciertas actividades contaminantes –actividades molestas, insalubres, peligrosas, emisoras de humos, ruidos, olores, etc.- debe ser reducida a los niveles mínimos e indispensables, y la exigencia de tasas por concesión de licencias, se hace a unos niveles financieros que resultan insuficientes al no cubrir mas que el coste administrativo de la concesión y no el grave perjuicio medioambiental que se produce con el ejercicio de la actividad.
- Respecto a las *contribuciones especiales*, en la situación actual de estabilidad presupuestaria:
 - Convendría plantearse la conveniencia de recuperarlas, incluso de eliminar la nota de voluntariedad para cierto tipo de inversiones y obras que generan de forma indubitable un notable beneficio selectivo sobre los bienes inmuebles situados en la zona de influencia.

-No debe desaparecer del ámbito de la Hacienda local esta figura de exacción, tan denostada en las últimas décadas. Debe, eso sí, simplificarse la gestión para favorecer la financiación mediante un reparto más justo de los costes de ciertas inversiones municipales⁵⁵.

4.- Medidas favorecedoras de la gestión tributaria:

- Deben protegerse los derechos y garantías de los contribuyentes en el ámbito de la Hacienda local, estableciendo los mecanismos necesarios para su cumplimiento. En este contexto es necesario exigir al legislador que se recupere la vía económico-administrativa para todos los municipios, para que no queden los pequeños y medianos sin el amparo que proporciona su gratuidad, agilidad e independencia.
- Reducir la dependencia en materia gestión tributaria local de los demás niveles de Hacienda –estatal y autonómica-, para evitar la gestión dual que produce retrasos, inseguridad jurídica en los administrados, cautelas, incertidumbres, etc.
- Deberían aplicarse métodos “anestésicos” a la fiscalidad local⁵⁶, para posibilitar el pago de los impuestos periódicos, que si bien corresponden a todo el año, producen una carga excesiva en la fecha concreta del plazo voluntario. Este objetivo⁵⁷ debería lograrse en general para todos los municipios implantando el sistema de la *cuenta corriente tributaria local* que incentivaría y facilitaría el pago de los tributos locales.
- Sin que ello suponga un menoscabo de los derechos y garantías de los contribuyentes, para la mejor gestión de los tributos, se hace necesario una mejor disponibilidad de información con trascendencia tributaria, que debe estar reglada por el legislador de modo que no se pueda cuestionar por la Administración tributaria del Estado, ni por la CC AA la legitimidad de poder solicitar y recibir los datos fiscales necesarios para alcanzar la gestión eficaz

⁵⁵ Cfr. Suarez Pandiello y Fernández Llera, R. (2008), p. 198.

⁵⁶ Al igual que se hace con los impuestos estatales indirectos –incorporación encubierta en el precio- y con los directos –anticipando y fraccionando el pago-.

⁵⁷ En la actualidad se viene aplicando por SUMA-Gestión Tributaria una fórmula, aunque similar menos favorable para los contribuyentes, en los municipios alicantinos que le tienen encomendado el cobro de los tributos locales en período voluntario el sistema de "Plan de pago personalizado" que permite a los contribuyentes ingresar cantidades a cuenta de las liquidaciones futuras.

de los tributos locales, tanto en la fase de liquidación, recaudación como en la de inspección.

- Dado que un elevado número de titulares de bienes inmuebles tienen su domicilio habitual lejos de esta provincia, convendría impulsar al legislador para que recupere en algunos tributos locales la figura del responsable subsidiario, especialmente en el caso del IIVTNU, para evitar que el sujeto pasivo, que deje de serlo en ejercicios futuros por haber transmitido el inmueble, resulte de difícil localización por su condición de foráneo y resulte incobrable la deuda tributaria de años anteriores.
- Para una mejor gestión de los tributos municipales se debe potenciar el empleo de los medios telemáticos e informáticos para practicar las declaraciones y el pago, debiendo contribuir en el desempeño de esta labor la Diputación, especialmente a favor de los municipios pequeños y medianos.
- Aunque la gestión tributaria desarrollada por el organismo de la Diputación provincial, SUMA-Gestión Tributaria, es muy eficiente y plausible, hasta el punto de que ha sido pionera en nuestro país y su organización esta sirviendo de ejemplo e inspiración para su implantación en otros territorios, se debería crear por la Diputación una “Oficina de Defensa del contribuyente provincial”, dado que su intervención es general para todos los municipios alicantinos, cuyo cometido abarcase la defensa de los contribuyentes de toda la provincia, lo que supondría un gran avance en la defensa y garantía de los derechos ciudadanos.
- Asimismo, se debería crear por la Diputación, adjunta a SUMA, una “Oficina provincial de servicio de ayuda para la planificación fiscal y sugerencias de medidas fiscales”, que, dentro de las normas legales, sirviese para orientar a los municipios que así lo solicitasen sobre su financiación respecto a la elaboración de los presupuestos anuales. Sería de especial interés la elaboración de simulaciones y planificación de ingresos, especialmente para aquellos que por su escaso tamaño no cuentan con una administración adecuada para realizar esta clase de análisis.

5.- En materia presupuestaria:

- Se deben reforzar los medios con los que garantizar el cumplimiento de las obligaciones contables y presupuestarias de las corporaciones locales, en contra de la inacción municipal.
- El Presupuesto de los municipios debe ser un presupuesto de fines u objetivos, abandonando la habitual costumbre de practicar la aplicación automática incrementalista de las diferentes partidas.
- El control presupuestario, además de efectuar el control exigible de legalidad, debe realizarse atendiendo a la eficacia y a la eficiencia para alcanzar los objetivos propuestos, y desarrollarse en forma interna y externa,
- En el control interno de infraestructuras y obras se deberá practicar la comprobación material de los gastos durante su realización y no solo en la recepción.
- Se debería crear por la Diputación una Oficina de Control Presupuestario que permita el control político de la gestión económica local, especialmente para los grandes municipios y para todos aquellos que voluntariamente lo soliciten.
- En relación con la Diputación provincial, deberían adoptarse medidas que favorezcan la transparencia y la rendición de cuentas, como la creación de los registros de necesidades y prioridades municipales y del registro de actuaciones territorializadas concertadamente con los Ayuntamientos.
- La Diputación provincial debería establecer un servicio de ayuda a la interpretación de las normas de fiscalidad local, sin perjuicio de que los ciudadanos empleen los servicios de la Dirección General de Tributos en materia de normas estatales, diera respuesta a las consultas elevadas sobre la aplicación de las ordenanzas fiscales municipales.

B) En el ámbito empresarial.

Las conclusiones que, en términos generales, pueden hacerse a modo de propuestas que deberían elevarse a los poderes públicos, en beneficio de la economía alicantina son:

- Debería aprobarse por el legislador una medida por la que se redujese la excesiva presión fiscal actual en las cotizaciones sociales, y, a cambio, se

adaptase⁵⁸, en forma compensatoria, el tipo impositivo general del IVA. Con ello no se perjudicaría la recaudación tributaria, y sin embargo, produciría las siguientes ventajas:

- Favorecería las exportaciones porque están exentas de IVA, mientras que el coste de las cotizaciones sociales, del que no se liberan en frontera los productos, sería menor, haciendo más competitivos en el mercado internacional a nuestros productos.

- Armonizaría mejor el precio de los productos importados a los que se les aplica el tipo de IVA español, y

- Incentivaría el empleo, en la medida que la bajada de los tipos de cotización reduce los costes salariales.

- Es necesario a corto y medio plazo que se derogue la reducción progresiva hasta la supresión, prevista para el 2011, y en algún caso para el 2014, de las deducciones desgravatorias por incentivos a la inversión y otras, que se contemplan en el IS e IRPF para las empresas. Se trata de evitar los efectos negativos que en la situación actual, y en el previsible futuro, produciría, en todo caso, indeseables para el buen funcionamiento económico.
- Asimismo se sugiere la conveniencia de mejorar el cumplimiento del principio de neutralidad en el IAE, modificando el factor determinante de la exención – persona física- por el del rendimiento obtenido en el ejercicio de la actividad, de modo que deban tributar todos aquellos que hayan superado un determinado nivel de beneficio, con independencia de su condición societaria o no, quedando excluidos de gravamen quienes obtengan pérdidas o escasos rendimientos.

⁵⁸ En la actual situación de crisis no es aconsejable elevar el tipo impositivo del IVA, pero esta consideración debería tenerse presente para el futuro.

Consideración final

Las características del tejido empresarial alicantino aconsejan, seguir manteniendo en el marco normativo de nuestra fiscalidad, el trato singular que hasta la fecha ha ofrecido, sin incurrir en rebajas de beneficios fiscales o técnicas objetivas de valoración de bases y cuotas tributarias. Una actuación así resulta acorde con los criterios internacionales y de la Unión Europea, para las PYMES y empresas familiares, y sirve para contrarrestar las grandes ventajas a las que pueden acceder los grandes grupos empresariales, sin impedir la positiva aportación que generan las pequeñas y medianas empresas en favor de la inversión, el empleo y el desarrollo económico provincial y nacional.

Es necesario, que la legislación estatal y autonómica, garanticen el cumplimiento de la Carta Europea, mediante el reconocimiento expreso del ámbito de actuación local en las muchas materias que en la praxis se atienden⁵⁹.

Es imprescindible que se afronte sin pérdida de tiempo la negociación entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la FEMP, tantas veces postergadas sin explicación razonable, para establecer un nuevo sistema de financiación local que permita a los municipios y provincia contar con un modelo impositivo más justo y menos rígido, menos apoyado en la fiscalidad inmobiliaria, y que responda en general a las indicaciones que a lo largo de estas páginas hemos formulado.

Y todo ello, porque la Hacienda local no puede ser entendida como una Hacienda residual o subsidiada, sino como una Hacienda plenamente integrada en los otros dos niveles para lo que hay que romper con el bilateralismo Estado-Entidades locales, procurando la participación y el compromiso de la Comunidad Valenciana en beneficio de la endémica financiación municipal alicantina.

Asimismo, la Hacienda local debe mejorar su nivel de eficacia y eficiencia en la administración de los recursos, suprimiendo las partidas de gastos innecesarios e improductivos, actuando con la moderación que exige a los Ayuntamientos las

⁵⁹ El reparto institucional de competencias debe fundamentarse en los principios de respeto a la autonomía local y de cooperación y coordinación entre las distintas administraciones públicas basada en la lealtad institucional.

funciones que les han sido encomendadas por sus ciudadanos, con el estricto cumplimiento de los dictados presupuestarios, y con la observancia en la consecución de los fines propuestos de los principios reguladores de la Hacienda municipal.

BIBLIOGRAFÍA

FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. La situación de los Ayuntamientos en España, sus carencias económicas y problemas de gestión: Diagnóstico y propuestas en una perspectiva europea. Madrid 2006.

FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. La Financiación local en España: Radiografía de presente y Propuestas de futuro. Madrid 2008.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (2005). Recaudación y Estadísticas del Sistema Tributario Español 1994-2004. Madrid. MEH.

MIRANDA HITA, J. (2001). "Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Financiación municipal: Esbozo de un balance (1990-1999); Crónica Tributaria, nº 97/2001.

PEDRAJA CHAPARRO, F. y CORDERO FERRERA, JM. (2008) "Sobre las participaciones locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas". Papeles de Economía Española, núm. 115, pp. 183-185.

PEDRAJA CHAPARRO, F. y SUAREZ PANDIELLO, J (2008): "Reformar la PIE ¿Misión imposible?", Papeles de Economía Española, nº 115; pp. 152-165.

POVEDA BLANCO, F. (2005) *Manual de Fiscalidad Local*. Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda

-(2008) "Es posible resucitar el IAE?", Papeles de Economía nº 115, pp 119-137.

RUBIO GUERRERO, J.J. (2008). "La Financiación tributaria de los entes locales en España. Problemas y Perspectivas de reforma". Papeles de Economía nº 115, pp. 6680.

SUAREZ PANDIELLO, J. (2000) "La corresponsabilidad fiscal en las entidades locales"; Papeles de Economía Española, nº 83, pp. 208-231.

SUAREZ PANDIELLO, J. Y FERNÁNDEZ LLERA, R.(2008) “El Principio del beneficio en la financiación de los municipios españoles. Teoría y Práctica”. Papeles de Economía Española nº 115, pp. 190-211.

TOBES PORTILLO, P. y ANGOITIA GRIJALBA, M. (2008). “La inversión en los Planes Autonómicos de Cooperación Local”; Papeles de Economía Española, número 115; pp. 166-179.

UTRILLA DE LA HOZ, A. “Deuda, estabilidad presupuestaria y entidades locales”, Papeles de economía nº 115, pp. 225- 241.

ANEXO. Cuadros estadísticos

CUADRO Nº 1

<i>Presión Fiscal (Ingresos fiscales en porcentaje PIB)</i>	2001	2002	2003	2004	2005 (P)	2006 (A)
Administración central	15,88	12,74	12,17	12,03	12,65	13,22
Administraciones de la seguridad social	11,61	11,59	11,67	11,72	11,73	11,76
Comunidades autónomas	2,51	6,25	6,89	7,45	7,84	8,13
Corporaciones locales	2,98	2,94	2,84	3,05	3,03	3,08
Total administraciones públicas	32,98	33,53	33,56	34,24	35,25	36,19
PIB utilizado (millones de euros)	680.678	729.206	782.531	840.106	905.455	976.189

(P) Provisional; (A) Avance.

Fuente: Rubio Guerrero, JJ (2008)

CUADRO Nº 2

PLANES DE COOPERACIÓN LOCAL. EJERCICIO 2007				
<i>C. Autónoma</i>	<i>Nombre del Fondo</i>	<i>Naturaleza</i>	<i>Evolución</i>	<i>Reparto</i>
Andalucía	Plan de Cooperación Municipal	Condicionado	Discrecional	Criterios explícitos
	Fondo de Nivelación de Servicios Municipales	Incondicionado	Discrecional	Criterios explícitos
Aragón	Fondo de Cooperación Municipal	Incondicionado	Discrecional	Criterios explícitos
	Programa de Política Territorial-Transferencias de capital	Condicionado	Discrecional	Discrecional
	Programa de Política Territorial-Entidades supramunicipales	Mixto	Discrecional	Criterios explícitos
	Fondo de Cohesión Comarcal	Condicionado	Discrecional	Discrecional
Islas Baleares	Fondo Interinsular de Financiación de Servicios	Incondicionado	Automática	Criterios explícitos
	Fondo de Compensación Interinsular	Condicionado	Automática	Criterios explícitos
	Fondo de Cooperación Municipal	Incondicionado	Discrecional	Criterios explícitos
Canarias	Fondo Canario de Financiación Municipal	Incondicionado	Automática	Criterios explícitos
	Bloque de Financiación Canario. Parte general	Condicionado	Automática	Discrecional
	Bloque de Financiación Canario. Fondo Insular para Inversiones	Condicionado	Automática	Discrecional
Cantabria	Fondo de Cooperación Municipal	Incondicionado	Discrecional	Criterios explícitos
Castilla y León	Fondo de Apoyo Municipal	Incondicionado	Discrecional	Discrecional
	Fondo de Cooperación Local	Condicionado	Discrecional	Criterios explícitos
Castilla-La Mancha	Fondo Regional de Cooperación Local	Mixto	Discrecional	Criterios explícitos
Cataluña	Fondo de Cooperación Local	Incondicionado	Discrecional	Criterios explícitos
Extremadura	Fondo Regional de Cooperación Municipal	Mixto	Discrecional	Criterios explícitos
	Fondo Solidario	Incondicionado	Discrecional	Criterios explícitos
Galicia	Fondo de Cooperación Local	Condicionado	Automática	Criterios explícitos
Madrid	Programa Regional de Inversiones y Servicios	Condicionado	Discrecional	Criterios implícitos
	Fondo Regional de Cooperación Municipal-General	Mixto	Discrecional	Criterios implícitos
	Fondo Regional de Cooperación Municipal-Dotación adicional	Incondicionado	Discrecional	Criterios explícitos
Murcia	Fondo de Cooperación Municipal	Mixto	Discrecional	Criterios explícitos
Navarra	Fondo de Participación-Transferencias corrientes	Incondicionado	Automática	Criterios explícitos
	Fondo de Participación-Transferencias de capital	Condicionado	Discrecional	Criterios explícitos
	Fondo de Participación-Otras ayudas	Mixto	Automática	Criterios explícitos
La Rioja	Fondo de Cooperación Local	Mixto	Discrecional	Criterios explícitos

Fuente: Tobes Portillo, P y Angoitia Grijalba, M. (2008), p. 177.

CUADRO Nº 3

ANÁLISIS COMPARADO DE LOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS			
	Instrumento y Dotación	Normativa reguladora	Criterios de distribución
ANDALUCÍA	Plan de Cooperación Municipal (incluye): — Fondo para la nivelación de servicios municipales — Dotación en 2008: 127.000.000 euros	Decreto 51/1989 de 14 de marzo Orden de 19 de marzo de 2007 Ley 24/2007 de 26 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad para 2008	Reparto según fórmula distributiva: — 47,3 por 100 partes iguales — 14 por 100 según inversa de la capacidad fiscal — 38,7 por 100 según población ponderada por un indicador de necesidades que incluye: • Número de núcleos • Población < 16 años • Población > 65 años • Incremento relativo de población • Viviendas por habitante • Plazas alojamiento • Tasa de paro • Renta media
ARAGÓN	Fondo Local de Aragón (incluye): — Fondo de Cooperación Municipal — Dotación en 2008: 20.040.485 euros	Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local Art. 262 de la Ley 7/1999 Ley 7/2007, de 29 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad para 2008	El Fondo se reparte entre todos los municipios, excepto Huesca, Teruel y Zaragoza, atendiendo a los siguientes criterios: — 40 por 100 partes iguales — 45 por 100 población — 15 por 100 núcleos de población diferenciados
ASTURIAS	No existe un instrumento específico de cooperación	—	—
BALEARES	Fondo de Cooperación Municipal Dotación en 2008: 11.530.000 euros	Decreto 22/2005, de 4 de marzo, de la Consellería de Interior del Gobierno Autónomo Balear Ley 5/2007, de 27 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad para 2008	Palma de Mallorca: 16 por 100 del importe del Fondo. El resto de la cuantía se distribuye entre el resto de municipios según: — Población — Solidaridad (partes iguales) — Insularidad — Doble insularidad — Incremento de población — Protección del territorio — Municipios de interior — Municipios pequeños — Municipios con diversos núcleos de población — Renta municipal — Presión fiscal municipal
CANTABRIA	Fondo de Cooperación Municipal Dotación en 2008: 15.149.043 euros	Decreto 109/2006, de 26 de octubre Ley 6/2007, de 26 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad para 2008	Hay dos sistemas de distribución: — Sistema de asignación fija destinado a los municipios con más de 20.000 habitantes — Sistema de asignación variable aplicado al resto de municipios que se reparten según la población relativa (85 por 100) y la extensión (15 por 100)
CASTILLA-LA MANCHA	Fondo Regional de Cooperación Local Dotación en 2008: 60.832.800 euros	Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha Decreto 12/2000 de 25 de marzo Ley 15/2007, de 20 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad para 2008	Criterios de reparto: — 95 por 100 municipios y entidades locales de ámbito inferior al municipal — 4 por 100 para mancomunidades — 1 por 100 se reserva para atender incidencias imprevisibles Criterios de reparto de la parte incondicionada del Fondo destinada a municipios y entes locales menores: — Cuota fija — Cuota variable: n.º habitantes x coeficiente en función de: • Existencia de núcleos de población diferenciados dentro del municipio • Esfuerzo fiscal • Unidades escolares • Ingresos patrimoniales

ANÁLISIS COMPARADO DE LOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS			
	Instrumento y Dotación	Normativa reguladora	Criterios de distribución
CASTILLA Y LEÓN	Fondo de Cooperación Local (incluye): — Fondo de Apoyo Municipal — Dotación en 2008: 6.088.643 euros	Decreto 57/1990, de 5 de abril, regulador de la gestión del Fondo de Cooperación Local Ley 10/2007, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad para 2008	Se destina a los 15 municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes Los criterios para su distribución se acuerdan cada año
CATALUÑA	Fondo de Cooperación Local Dotación en 2008: 147.318.150 euros (se distribuyen entre municipios, comarcas y entidades municipales descentralizadas)	Ley autonómica 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña Ley 16/2007 de 20 de diciembre de Presupuestos de la Generalitat para 2008	El importe destinado a los municipios se distribuye del siguiente modo: — Barcelona: cantidad fija — Resto de municipios según: • Población • Existencia de núcleos de población diferenciados fuera de la entidad • Capitalidad comarcal • Superficie
COMUNIDAD VALENCIANA	No existe ningún instrumento específico de cooperación	—	—
EXTREMADURA	Fondo Regional de Cooperación Dotación en 2008: 36.000.000 euros	Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2008	Criterios de reparto: — Una cantidad fija por cada municipio o entidad local menor — Resto según población
GALICIA	Fondo de Cooperación Local Dotación en 2008: 119.499.067 euros (2.5692 por 100 de la recaudación líquida de los capítulos I, II y III del Presupuesto de ingresos) 6.000.000 adicionales para financiar competencias transferidas en virtud del Pacto Local	Real Decreto 373/1990 Ley 5/2000, de 28 de diciembre (Disposición Adicional Octava) Ley 2/2002, de 29 de abril (Disposición Adicional Sexta)	El reparto de estos recursos se desglosa de la siguiente forma: — Un 1,8945 por 100 se distribuye entre todos los municipios distinguiendo tres tramos de población (menos de 15.000 habitantes, entre 15.000 y 50.000 y más de 50.000) según: población, superficie, esfuerzo fiscal y núcleos de población — Un 0,3599 por 100 se reparte entre los municipios con población inferior a los 15.000 habitantes por cuotas fijas, distinguiendo varias escalas en función del número de habitantes — 0,1641 por 100 se destina a financiar las competencias transferidas en virtud del Pacto Local
MADRID	Fondo Regional de Cooperación Municipal Dotación en 2008: 8.200.000 euros	Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad Decreto 66/2003, de 22 de mayo	La Dirección General de Administración Local de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, establece los criterios y variables de distribución a los efectos de la asignación máxima anual que corresponde a cada uno de los Ayuntamientos beneficiarios: — Población (60 por 100) — Ingresos corrientes municipales (20 por 100) — Medio ambiente (20 por 100)
MURCIA	Fondo de Cooperación Municipal Dotación en 2008: 5.199.205 euros Convenios singulares con determinados ayuntamientos de la región Dotación en 2008: 6.119.564 euros	Ley 10/2007 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2008	Se distribuye por cuantías fijas a cada municipio en función de su tamaño poblacional distinguiendo dos escalas: — Menor de 5.000 habitantes, con una dotación de 1.108.021 euros — Entre 5.000 y 50.000 habitantes, cuyo importe asciende a 4.091.184 euros
RIOJA (LA)	Fondo de Cooperación Local Dotación en 2008: 21.612.723 euros	Ley 1/2003 de la Administración Local de La Rioja (artículo 113) Ley 5/2007 de 21 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2008	Líneas de actuación: — Sección de capitalidad: cantidad fija para Logroño — Sección de cabeceras de comarca. Se destina una cantidad fija a los municipios considerados cabeceras de comarca — Sección de municipios de población superior a 2.000 habitantes. Reparto según cuota fija y población — Sección de pequeños municipios (carácter finalista) — Sección de otras líneas finalistas (resto)

Fuente: Pedraja Chaparro, F. y Cordero Ferrera, JM. (2008), pp. 183-185

CUADRO Nº 4

CUANTÍA DE LAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS A LOS ENTES LOCALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
	Importe transferencias 2008	Población (a)	Importe por habitante	Presupuesto total 2008	Porcentaje presupuesto
Andalucía.....	127.000.000	7.975.672	15,92	31.961.796.132	0,40
Aragón.....	24.040.485	1.277.471	18,82	5.568.000.000	0,43
Asturias.....	—	1.001.062	—	5.834.302.503	—
Baleares.....	—	1.076.896	—	3.323.319.410	—
Cantabria.....	15.149.043	568.091	26,67	2.408.000.000	0,63
Castilla-La Mancha (b).....	19.320.000	1.932.261	10,00	8.900.619.220	0,22
Castilla y León (c).....	6.271.302	2.523.020	4,85	10.384.241.095	0,06
Cataluña.....	167.561.191	7.134.697	23,49	34.749.737.600	0,48
Comunidad Valenciana.....	—	4.806.908	—	16.031.754.550	—
Extremadura (d).....	17.500.000	1.086.373	16,11	5.528.959.136	0,32
Galicia.....	125.499.067	2.767.524	45,35	11.556.120.000	1,09
Madrid.....	—	6.008.183	—	18.985.000.000	—
Murcia.....	—	1.370.306	—	4.733.776.762	—
Rioja (La) (e).....	7.646.519	306.377	24,96	1.298.862.491	0,59

Notas:
 (a) Los datos de población proceden del *Padrón Municipal* a 1 de enero de 2006 (*Fuente:* Instituto Nacional de Estadística).
 (b) El importe a repartir representa el 30 por 100 (parte incondicionada) de la cantidad total presupuestada para el Fondo, que asciende a 60,83 millones de euros.
 (c) El importe del Fondo incondicionado se reparte únicamente entre los municipios con población superior a los 20.000 habitantes, de modo que para calcular el importe por habitante sólo se ha tenido en cuenta la población de estos municipios (1.292.183 habitantes).
 (d) Se recoge únicamente la parte del Fondo que corresponde a financiación incondicionada.
 (e) Se incluyen sólo los importes relativos a las líneas de actuación que reciben transferencias incondicionadas.

Fuente: Suárez Pandiello, J. y Fernández Llera, R (2008) con datos del MEH.

CUADRO Nº 5

PRESIÓN FISCAL MUNICIPAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
Porcentaje del PIB (año 2003)	Impuestos directos (c.1)	Impuestos indirectos (c.2)	Tasas y otros ingresos (c.3)	Ingresos fiscales propios (c.1 + c.2 + c.3)
Andalucía.....	1,18	0,22	0,73	2,13
Aragón.....	1,00	0,12	0,70	1,82
Principado de Asturias.....	1,08	0,17	0,60	1,85
Islas Baleares.....	1,23	0,18	0,78	2,19
Canarias.....	0,91	0,19	0,65	1,75
Cantabria.....	1,17	0,18	0,90	2,25
Castilla y León.....	1,01	0,16	0,59	1,76
Castilla-La Mancha.....	1,05	0,23	0,75	2,03
Cataluña.....	1,29	0,13	0,62	2,04
Comunidad Valenciana.....	1,30	0,24	0,64	2,18
Extremadura.....	0,82	0,12	0,61	1,55
Galicia.....	0,95	0,14	0,50	1,59
Madrid.....	0,80	0,15	0,44	1,39
Murcia.....	1,08	0,21	0,68	1,97
Navarra.....	0,77	0,22	0,76	1,75
País Vasco.....	0,80	0,17	0,71	1,68
La Rioja.....	0,93	0,20	0,69	1,82
Total CC.AA.	1,06	0,17	0,62	1,85
Coeficiente de variación (porcentaje).....	16,90	21,50	16,20	13,20

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Economía y Hacienda (2005).

Fuente: Suárez Pandiello, J. y Fernández Llera, R (2008) con datos del MEH. p.194

CUADRO Nº 6

INGRESOS FISCALES MUNICIPALES CON CAPACIDAD NORMATIVA (PORCENTAJE)							
Municipios ordenados por población (año 2004)	IBI	IVTM	IVTNLJ	IAE	ICIO	Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	Total
Madrid	34,0	13,1	14,3	8,1	10,4	20,1	100,0
Barcelona	42,9	9,6	10,3	10,9	4,4	21,9	100,0
Valencia	50,0	13,4	8,5	5,5	6,1	16,4	100,0
Sevilla	39,9	13,6	5,1	10,0	4,3	27,1	100,0
Zaragoza	30,0	10,2	10,7	8,6	5,4	35,2	100,0
Málaga	41,8	12,9	8,7	5,7	10,6	20,4	100,0
Murcia	30,2	12,5	11,2	9,6	17,0	19,5	100,0
Palmas de Gran Canaria (Las)	42,7	18,2	7,3	13,1	6,9	11,9	100,0
Palma de Mallorca	36,3	12,5	6,9	8,3	7,8	28,2	100,0
Valladolid	39,5	13,4	5,9	8,3	14,8	18,2	100,0
Córdoba	35,4	13,2	7,8	6,1	6,7	30,9	100,0
Alicante/Alacant	45,0	10,6	8,1	9,9	10,5	15,9	100,0
Vigo	40,0	11,6	6,7	11,2	7,2	23,4	100,0
Gijón	39,2	12,1	10,4	11,3	11,8	15,1	100,0
Hospitalet de Llobregat (L')	44,5	13,3	10,7	10,7	7,5	13,3	100,0
Coruña (A)	35,8	11,2	5,3	12,4	6,7	28,6	100,0
Granada	37,9	13,6	7,9	7,5	7,0	26,1	100,0
Santa Cruz de Tenerife	37,9	12,5	7,3	7,9	6,7	27,6	100,0
Badalona	40,6	15,2	7,5	10,8	5,1	20,8	100,0
Oviedo	39,4	8,2	9,6	6,2	10,1	26,5	100,0
Elche/Elx	37,6	15,4	6,4	8,9	10,8	21,0	100,0
Móstoles	40,3	22,1	4,9	7,9	8,0	16,9	100,0
Cartagena	34,1	12,8	7,9	6,6	12,0	26,6	100,0
Sabadell	33,3	15,1	10,2	7,4	7,4	26,7	100,0
Jerez de la Frontera	34,0	8,7	4,1	6,6	0,0	46,6	100,0
Fuenlabrada	36,1	15,8	4,6	12,6	9,7	21,3	100,0
Alcalá de Henares	42,1	12,3	6,2	13,2	7,6	18,7	100,0
Terrassa	38,4	14,6	8,8	7,4	8,5	22,3	100,0
Santander	32,3	8,8	8,0	6,0	6,0	38,9	100,0
Leganés	29,7	15,3	6,4	9,7	8,8	30,2	100,0
Almería	38,4	12,0	5,7	9,0	9,1	25,8	100,0
Burgos	26,9	6,8	10,2	8,2	8,1	39,9	100,0
Castellón de la Plana	37,9	12,3	6,4	11,4	9,3	22,7	100,0
Salamanca	43,9	9,7	11,0	3,7	11,3	20,4	100,0
Alcorcón	38,6	15,3	14,2	7,8	8,4	15,6	100,0
Albacete	34,0	12,3	7,3	7,0	11,8	27,5	100,0
Getafe	32,6	13,2	5,1	14,0	16,8	18,2	100,0
Huelva	36,5	11,9	4,7	10,6	9,2	26,9	100,0
Logroño	30,9	10,3	11,4	7,3	12,6	27,5	100,0
Badajoz	55,1	14,8	6,2	5,4	12,1	6,3	100,0
San Cristóbal de La Laguna	32,7	12,8	6,3	11,5	8,2	28,5	100,0
León	40,1	7,9	5,5	4,3	7,5	34,7	100,0
Cádiz	46,1	8,7	6,6	11,3	4,0	23,4	100,0
Tarragona	38,6	10,4	3,8	17,2	3,9	26,2	100,0
Lleida	41,7	11,9	5,5	9,2	8,5	23,2	100,0
Marbella	54,9	4,6	7,5	6,8	8,0	18,4	100,0
Santa Coloma de Gramenet	44,1	17,4	9,4	6,4	7,3	15,3	100,0
Jaén	44,1	13,6	11,3	2,9	4,5	23,6	100,0
Mataró	32,4	13,1	8,3	9,5	7,6	29,0	100,0
Algeciras	44,9	11,7	3,5	5,0	11,8	23,1	100,0
Dos Hermanas	30,5	12,1	12,0	5,1	16,4	23,9	100,0
Ourense	37,4	10,7	4,4	7,7	7,0	32,7	100,0
Torrejón de Ardoz	33,6	13,6	9,5	9,5	8,3	25,5	100,0
Alcobendas	34,1	15,4	22,8	10,2	4,1	13,4	100,0

INGRESOS FISCALES MUNICIPALES CON CAPACIDAD NORMATIVA (PORCENTAJE)							
Municipios ordenados por población (año 2004)	IBI	IVTM	IIVTNU	IAE	ICIO	Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	Total
Reus.....	42,3	12,7	4,7	7,8	8,3	24,3	100,0
Santiago de Compostela	42,1	10,6	2,3	5,1	8,1	31,9	100,0
Lugo	31,0	11,4	5,1	7,8	5,7	39,0	100,0
San Fernando	33,6	9,6	7,6	4,1	5,6	39,4	100,0
Cáceres	31,8	9,3	3,2	6,6	8,8	40,3	100,0
Parla	16,8	9,6	3,4	1,5	40,0	28,8	100,0
Avilés	33,2	10,9	2,5	9,3	4,1	40,1	100,0
Girona	36,1	10,4	7,0	7,7	8,9	29,8	100,0
Cornellà de Llobregat	39,4	13,6	10,7	13,1	5,2	17,9	100,0
Coslada	33,9	19,5	8,0	10,3	8,6	19,7	100,0
Palencia.....	30,9	9,9	8,3	3,8	5,4	41,6	100,0
Puerto de Santa María (El)	44,6	7,5	7,7	8,3	9,2	22,7	100,0
Sant Boi de Llobregat	41,6	13,3	8,4	16,7	4,4	15,7	100,0
Talavera de la Reina	36,1	14,7	9,1	2,7	11,4	26,1	100,0
Pontevedra	33,4	12,1	1,1	4,6	8,5	40,4	100,0
Ferrol	40,9	16,9	7,0	10,7	12,0	12,6	100,0
Torre Vieja	50,7	6,0	4,1	4,6	15,4	19,2	100,0
Toledo	37,8	12,9	5,4	5,6	13,5	24,8	100,0
Guadalajara.....	32,4	12,1	9,9	3,8	11,8	30,1	100,0
Ciudad Real.....	40,3	10,6	2,5	4,9	9,1	32,7	100,0
Zamora	33,8	7,6	8,8	9,9	17,1	22,8	100,0
Segovia	34,1	11,5	7,4	4,4	8,2	34,6	100,0
Ávila.....	29,1	9,6	11,4	5,1	17,1	27,7	100,0
Mérida	33,1	10,9	12,2	3,6	5,4	34,8	100,0
Huesca	37,6	11,1	2,8	3,9	9,5	35,0	100,0
Cuenca	27,6	10,8	7,7	4,7	14,2	35,1	100,0
Soria	36,7	11,4	10,0	8,3	10,5	23,1	100,0
Teruel	32,0	15,2	2,1	4,9	7,7	38,0	100,0
Media global.....	37,9	12,0	9,1	8,5	8,5	24,0	100,0

Fuente: Dirección General de Coordinación Financiera con las Haciendas Locales, y elaboración propia.

Fuente: Suárez Pandiello, J. y Fernández Llera, R (2008) con datos del MEH. P.194

CUADRO Nº 7



CUADRONº8

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL BENEFICIO (I)							
Municipios ordenados por esfuerzo fiscal (normalizado por media global)	Recaudación por habitante	Presión fiscal	Esfuerzo fiscal	Municipios ordenados por esfuerzo fiscal (normalizado por media global)	Recaudación por habitante	Presión fiscal	Esfuerzo fiscal
Jerez de la Frontera.....	246	339	468	Zaragoza	146	135	125
Cáceres.....	159	198	247	Málaga	75	96	124
Mérida	155	194	242	Leganés.....	94	106	121
San Fernando.....	144	187	242	Palma de Mallorca	130	124	119
Marbella	172	203	239	Toledo	106	111	117
León	188	209	234	Santa Cruz de Tenerife.....	87	101	117
Parla	132	176	233	Murcia.....	80	96	116
Lugo	180	203	230	Castellón de la Plana.....	108	111	114
Puerto de Santa María (El).....	139	176	222	Sabadell.....	113	113	112
Burgos.....	268	241	217	Elche/Elx	82	95	110
Ciudad Real	160	181	205	Almería.....	102	105	108
Pontevedra	154	177	205	Terrassa	94	99	105
Córdoba	119	155	201	Tarragona	146	122	103
Santiago de Compostela	157	174	194	Girona	184	136	100
Avilés.....	151	170	190	Media global	100	100	100
Santander	201	194	188	Fuenlabrada.....	65	81	99
Cuenca	161	173	185	Alicante/Alacant	68	82	99
Ourense.....	142	156	171	Badalona	74	84	95
Cartagena.....	114	139	170	Torrejón de Ardoz	74	82	90
Guadalajara	135	151	169	Reus	110	100	90
Ávila	129	146	167	Getafe	80	84	88
Coruña (A).....	120	141	166	Logroño.....	111	98	87
Cádiz.....	102	128	160	Cornellà de Llobregat	68	77	87
Palencia	169	163	157	Salamanca	82	83	84
Algeciras.....	89	117	153	Sant Boi de Llobregat.....	64	73	84
Albacete	103	125	151	Lleida.....	127	103	84
Mataró	124	136	150	Barcelona	116	93	75
Talavera de la Reina.....	92	115	144	Alcalá de Henares	68	71	75
Zamora.....	108	125	144	Soria.....	88	80	72
San Cristóbal de La Laguna	95	115	139	Coslada	61	64	67
Sevilla	101	118	139	Santa Coloma de Gramenet.....	42	52	65
Oviedo.....	131	135	139	Valencia	59	60	61
Huesca.....	176	155	137	Valladolid.....	65	62	60
Jaén.....	86	107	135	Hospitalet de Llobregat (L')	45	51	57
Granada	103	116	130	Móstoles.....	37	45	55
Torreveja	113	121	129	Alcorcón.....	50	52	54
Teruel.....	143	135	128	Madrid	84	67	54
Huelva	95	110	128	Ferrol.....	35	43	54
Dos Hermanas	82	102	128	Alcobendas.....	101	71	50
Segovia.....	153	139	127	Gijón	43	45	47
Vigo.....	92	108	126	Palmas de Gran Canaria (Las).....	27	29	30
Media global	100	100	100	Badajoz	19	23	30

Fuente: Instituto Klein, Dirección General de Coordinación Financiera con las Haciendas Locales, y elaboración propia.

CUADRO Nº 9

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL BENEFICIO (II)							
Municipios ordenados por esfuerzo fiscal (normalizado por media muestral)	Recaudación por habitante	Presión fiscal	Esfuerzo fiscal	Municipios ordenados por esfuerzo fiscal (normalizado por media muestral)	Recaudación por habitante	Presión fiscal	Esfuerzo fiscal
Jerez de la Frontera	222	282	351	Vigo	83	90	94
Cáceres	143	165	186	Zaragoza	132	113	94
Mérida	140	161	182	Málaga	67	80	93
San Fernando	130	155	182	Leganés	84	89	91
Marbella	155	169	179	Palma de Mallorca	118	103	89
León	169	174	175	Toledo	95	92	88
Parla	119	146	175	Santa Cruz de Tenerife	78	84	88
Lugo	162	169	173	Murcia	72	80	87
Puerto de Santa María (El)	125	146	167	Castellón de la Plana	98	93	86
Burgos	242	201	163	Sabadell	102	94	84
Ciudad Real	145	151	154	Elche/Elx	74	79	82
Pontevedra	139	147	154	Almería	92	87	81
Córdoba	108	129	151	Terrassa	85	82	79
Santiago de Compostela	142	145	145	Tarragona	131	102	77
Avilés	137	141	143	Girona	166	113	75
Santander	182	162	141	Fuenlabrada	59	67	75
Cuenca	146	144	139	Alicante/Alacant	61	68	74
Ourense	128	130	129	Badalona	67	70	72
Cartagena	103	116	128	Torrejón de Ardoz	67	68	68
Guadalajara	122	126	127	Reus	100	83	68
Ávila	116	122	125	Getafe	72	70	66
Coruña (A)	108	117	125	Logroño	100	82	65
Cádiz	92	106	120	Cornellà de Llobregat	62	64	65
Palencia	153	136	118	Salamanca	74	69	63
Algeciras	81	97	115	Sant Boi de Llobregat	57	61	63
Albacete	93	104	114	Lleida	114	86	63
Mataró	111	113	113	Barcelona	105	78	56
Talavera de la Reina	83	96	108	Alcalá de Henares	61	59	56
Zamora	98	104	108	Soria	79	66	54
San Cristóbal de La Laguna	86	96	105	Coslada	55	53	50
Sevilla	91	99	104	Santa Coloma de Gramenet	38	44	49
Oviedo	118	112	104	Valencia	54	50	46
Huesca	159	129	103	Valladolid	58	52	45
Jaén	77	89	101	Hospitalet de Llobregat (L')	41	42	43
Media muestral	100	100	100	Móstoles	33	37	41
Granada	93	96	98	Alcorcón	45	43	41
Torrevieja	102	100	97	Madrid	76	56	41
Teruel	129	112	96	Ferrol	31	36	41
Huelva	86	92	96	Alcobendas	91	59	38
Dos Hermanas	74	85	96	Gijón	39	37	36
Segovia	138	116	95	Palmas de Gran Canaria (Las)	24	24	23
				Badajoz	17	19	22

Fuente: Instituto Klein, Dirección General de Coordinación Financiera con las Haciendas Locales, y elaboración propia.

CUADRO Nº 10

ÍNDICES DE ESFUERZO FISCAL CON RELACIÓN A POBLACIÓN, RENTA E IRPF (I)							
Municipios ordenados por población (normalizados según media global)	EF según ingresos por habitante	EF según ingresos por renta	EF según ingresos por base imponible de IRPF	Municipios ordenados por población (normalizados según media global)	EF según ingresos por habitante	EF según ingresos por renta	EF según ingresos por base imponible de IRPF
Madrid.....	84	67	62	León.....	188	209	190
Barcelona.....	116	93	84	Cádiz.....	102	128	136
Valencia.....	59	60	55	Tarragona.....	146	122	132
Sevilla.....	101	118	114	Lleida.....	127	103	127
Zaragoza.....	146	135	127	Marbella.....	172	203	220
Málaga.....	75	96	108	Santa Coloma de Gramenet.....	42	52	66
Murcia.....	80	96	97	Jaén.....	86	107	104
Palmas de Gran Canaria (Las).....	27	29	34	Mataró.....	124	136	165
Palma de Mallorca.....	130	124	137	Algeciras.....	89	117	131
Valladolid.....	65	62	62	Dos Hermanas.....	82	102	136
Córdoba.....	119	155	157	Ourense.....	142	156	178
Alicante/Alacant.....	68	82	79	Torrejón de Ardoz.....	74	82	98
Vigo.....	92	108	108	Alcobendas.....	101	71	64
Gijón.....	43	45	47	Reus.....	110	100	124
Hospitalet de Llobregat (L').....	45	51	61	Santiago de Compostela.....	157	174	164
Coruña (A).....	120	141	111	Lugo.....	180	203	211
Granada.....	103	116	110	San Fernando.....	144	187	239
Santa Cruz de Tenerife.....	87	101	111	Cáceres.....	159	198	163
Badalona.....	74	84	97	Parla.....	132	176	239
Oviedo.....	131	135	114	Ávilés.....	151	170	182
Elche/Elx.....	82	95	165	Girona.....	184	136	144
Móstoles.....	37	45	52	Cornellà de Llobregat.....	68	77	89
Cartagena.....	114	139	164	Coslada.....	61	64	75
Sabadell.....	113	113	118	Palencia.....	169	163	190
Jerez de la Frontera.....	246	339	427	Puerto de Santa María (El).....	139	176	197
Fuenlabrada.....	65	81	108	Sant Boi de Llobregat.....	64	73	78
Alcalá de Henares.....	68	71	80	Talavera de la Reina.....	92	115	161
Terrassa.....	94	99	103	Pontevedra.....	154	177	178
Santander.....	201	194	195	Ferrol.....	35	43	45
Leganés.....	94	106	124	Torre Vieja.....	113	121	267
Almería.....	102	105	136	Toledo.....	106	111	73
Burgos.....	268	241	242	Guadalajara.....	135	151	123
Castellón de la Plana.....	108	111	104	Ciudad Real.....	160	181	153
Salamanca.....	82	83	95	Zamora.....	108	125	130
Alcorcón.....	50	52	54	Segovia.....	153	139	165
Albacete.....	103	125	128	Ávila.....	129	146	134
Getafe.....	80	84	90	Mérida.....	155	194	228
Huelva.....	95	110	132	Huesca.....	176	155	157
Logroño.....	111	98	100	Cuenca.....	161	173	178
Badajoz.....	19	23	24	Soria.....	88	80	78
San Cristóbal de La Laguna.....	95	115	145	Teruel.....	143	135	132

Fuente: Instituto Klein, AEAT, Dirección General de Coordinación Financiera con las Haciendas Locales, y elaboración propia.

CUADRO Nº 11

ÍNDICES DE ESFUERZO FISCAL CON RELACIÓN A POBLACIÓN, RENTA E IRPF (II)								
Municipios ordenados por población (normalizados según media muestral)	EF según ingresos por habitante	EF según ingresos por renta	EF según ingresos por base imponible de IRPF	Municipios ordenados por población (normalizados según media muestral)	EF según ingresos por habitante	EF según ingresos por renta	EF según ingresos por base imponible de IRPF	
Madrid.....	76	56	47	León.....	169	174	146	
Barcelona.....	105	78	64	Cádiz.....	92	106	104	
Valencia.....	54	50	42	Tarragona.....	131	102	101	
Sevilla.....	91	99	87	Lleida.....	114	86	97	
Zaragoza.....	132	113	97	Marbella.....	155	169	168	
Málaga.....	67	80	83	Santa Coloma de Gramenet.....	38	44	50	
Murcia.....	72	80	75	Jaén.....	77	89	80	
Palmas de Gran Canaria (Las).....	24	24	26	Mataró.....	111	113	126	
Palma de Mallorca.....	118	103	105	Algeciras.....	81	97	100	
Valladolid.....	58	52	47	Dos Hermanas.....	74	85	104	
Córdoba.....	108	129	120	Ourense.....	128	130	137	
Alicante/Alacant.....	61	68	61	Torrejón de Ardoz.....	67	68	75	
Vigo.....	83	90	83	Alcobendas.....	91	59	49	
Gijón.....	39	37	36	Reus.....	100	83	95	
Hospitalet de Llobregat (L').....	41	42	47	Santiago de Compostela.....	142	145	125	
Coruña (A).....	108	117	85	Lugo.....	162	169	162	
Granada.....	93	96	85	San Fernando.....	130	155	183	
Santa Cruz de Tenerife.....	78	84	85	Cáceres.....	143	165	125	
Badalona.....	67	70	75	Parla.....	119	146	183	
Oviedo.....	118	112	88	Avilés.....	137	141	139	
Elche/Elx.....	74	79	126	Girona.....	166	113	111	
Móstoles.....	33	37	40	Cornellà de Llobregat.....	62	64	68	
Cartagena.....	103	116	125	Coslada.....	55	53	58	
Sabadell.....	102	94	91	Palencia.....	153	136	146	
Jerez de la Frontera.....	222	282	327	Puerto de Santa María (El).....	125	146	151	
Fuenlabrada.....	59	67	83	Sant Boi de Llobregat.....	57	61	60	
Icalá de Henares.....	61	59	61	Talavera de la Reina.....	83	96	124	
Terrassa.....	85	82	79	Pontevedra.....	139	147	136	
Santander.....	182	162	149	Ferrol.....	31	36	35	
Leganés.....	84	89	95	Torre Vieja.....	102	100	204	
Almería.....	92	87	104	Toledo.....	95	92	56	
Burgos.....	242	201	186	Guadalajara.....	122	126	94	
Castellón de la Plana.....	98	93	79	Ciudad Real.....	145	151	117	
Salamanca.....	74	69	73	Zamora.....	98	104	100	
Alcorcón.....	45	43	41	Segovia.....	138	116	126	
Albacete.....	93	104	98	Ávila.....	116	122	103	
Getafe.....	72	70	69	Mérida.....	140	161	175	
Huelva.....	86	92	101	Huesca.....	159	129	121	
Logroño.....	100	82	77	Cuenca.....	146	144	136	
Badajoz.....	17	19	19	Soria.....	79	66	60	
San Cristóbal de La Laguna.....	86	96	111	Teruel.....	129	112	101	

Fuente: Instituto Klein, AEAT, Dirección General de Coordinación Financiera con las Haciendas Locales, y elaboración propia.

CUADRO Nº 12

ÍNDICE SINTÉTICO DE ESFUERZO FISCAL PONDERADO						
Municipios ordenados según población	31: Tasas por servicios municipales	32: Tasas por utilización del dominio público local	34: Precios públicos por servicios municipales	35: Otros precios públicos (a extinguir)	36: Contribuciones especiales	Índice sintético
Ponderaciones utilizadas.....	67,2	22,4	7,2	1,5	1,7	100,0
Madrid	53,9	115,6	12,7	131,9	136,6	67,4
Barcelona	72,2	125,6	199,1	1,1	140,5	93,4
Valencia.....	52,4	89,6	35,8	12,5	139,1	60,4
Sevilla.....	91,8	179,5	196,8	3,9	138,6	118,4
Zaragoza	159,9	102,7	49,2	0,0	76,5	135,3
Málaga.....	83,7	128,2	115,3	64,8	103,6	96,0
>500.000 habitantes	71,2	119,7	80,4	66,3	131,2	83,6
Murcia.....	102,2	83,7	113,5	-0,1	47,8	96,4
Palmas de Gran Canaria (Las).....	9,9	90,2	0,0	0,0	104,6	28,6
Palma de Mallorca	166,2	0,0	145,5	0,0	129,0	124,3
Valladolid	34,2	97,1	105,2	574,4	59,3	62,1
Córdoba.....	219,8	0,0	41,8	202,7	60,1	154,9
Alicante/Alacant	82,0	104,2	50,2	0,0	0,0	82,0
Vigo	108,0	96,0	171,6	0,0	69,9	107,6
Gijón	16,5	89,5	169,4	0,8	101,7	45,0
Hospitalet de Llobregat (L')	49,2	62,8	11,4	0,0	160,5	50,6
Coruña (A)	156,4	149,0	33,5	0,0	0,0	140,8
Granada	133,2	116,9	2,3	-2,1	0,0	115,8
Santa Cruz de Tenerife.....	107,8	106,3	7,3	0,0	218,8	100,5
Badalona	123,8	0,0	9,2	2,2	0,0	83,9
Oviedo	123,1	184,5	118,6	44,7	90,1	134,7
Elche/Elx	99,3	114,6	29,8	0,0	0,0	94,5
Móstoles	21,8	67,1	212,6	0,0	0,0	44,9
Cartagena	84,3	99,5	957,7	0,0	0,0	147,6
Sabadell	148,7	0,0	33,3	88,1	510,0	112,4
Jerez de la Frontera.....	458,6	92,6	72,8	290,6	0,0	338,6
Fuenlabrada	72,0	0,0	45,3	1.477,8	363,2	80,6
Alcalá de Henares	73,1	80,0	54,8	0,0	0,0	71,0
Terrassa	99,6	139,1	0,2	0,0	61,8	99,1
Santander.....	208,6	0,0	736,6	0,0	76,6	194,3
Leganés.....	128,3	81,1	28,5	0,0	0,0	106,4
Almería	148,3	13,3	14,1	28,5	48,0	104,9
Burgos.....	308,8	131,4	30,7	0,0	111,7	241,1
Castellón de la Plana	94,2	195,7	29,0	0,0	123,6	111,3
Salamanca.....	82,4	104,1	37,3	0,0	97,6	83,0
Alcorcón.....	58,4	0,0	148,5	2,5	110,8	51,9
Albacete.....	103,4	144,1	303,1	12,4	76,1	125,0
Getafe.....	78,7	106,7	95,5	8,8	0,0	83,8
Huelva.....	130,4	64,6	84,4	35,9	84,9	110,1
Logroño.....	99,4	82,5	155,3	0,0	106,0	98,2
Badajoz	6,3	79,0	10,4	0,0	44,9	23,4
San Cristóbal de La Laguna.....	140,5	80,3	33,1	0,0	0,0	114,8
León	220,7	96,4	549,2	-0,1	0,0	209,3
Cádiz.....	141,9	77,3	209,8	0,0	0,0	127,7
Tarragona	123,2	127,8	146,5	0,0	26,0	122,4
Lleida	64,9	0,0	215,2	2.392,4	422,4	103,1
Marbella.....	248,7	135,5	25,4	0,0	200,4	202,7
Santa Coloma de Gramenet	40,1	93,9	61,5	0,0	0,0	52,4
Jaén	120,8	78,8	115,8	11,0	0,0	107,3
Mataró	169,3	0,0	308,1	13,5	1,4	136,1
Algeciras	139,5	97,8	15,0	0,0	0,0	116,7

CUADRO Nº 12 (conclusión)

ÍNDICE SINTÉTICO DE ESFUERZO FISCAL PONDERADO						
Municipios ordenados según población	31: Tasas por servicios municipales	32: Tasas por utilización del dominio público local	34: Precios públicos por servicios municipales	35: Otros precios públicos (a extinguir)	36: Contribuciones especiales	Índice sintético
Dos Hermanas	109,2	0,0	142,3	1.222,5	0,0	102,4
Ourense.....	187,2	101,8	101,9	0,0	-13,1	155,7
Torrejón de Ardoz.....	65,1	0,0	294,9	1.084,5	12,6	81,8
Alcobendas	62,0	124,8	18,7	0,0	0,0	71,0
100.000 a 500.000 habitantes	115,3	78,6	123,2	133,6	79,6	107,3
Todos	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Reus	105,6	93,7	31,2	0,0	312,7	99,5
Santiago de Compostela.....	229,7	63,0	44,5	96,1	64,7	174,2
Lugo.....	250,6	121,7	84,9	0,0	70,0	202,9
San Fernando	277,1	0,0	3,5	0,1	0,1	186,5
Cáceres	241,2	158,1	6,9	0,0	0,0	197,9
Parla.....	224,4	0,0	25,5	1.493,7	0,0	175,6
Avilés.....	139,6	177,9	492,9	0,0	24,9	169,4
Girona.....	122,8	134,7	286,0	0,0	148,0	135,7
Cornellà de Llobregat	67,2	134,4	23,9	0,0	0,0	77,0
Coslada	56,4	106,1	24,8	9,6	0,0	63,6
Palencia.....	210,6	78,8	1,8	224,4	13,4	162,9
Puerto de Santa María (El)	182,0	226,3	33,7	0,0	0,0	175,4
Sant Boi de Llobregat.....	46,1	134,7	167,9	0,0	-0,1	73,1
Talavera de la Reina	131,3	109,1	24,9	0,0	35,9	115,1
Pontevedra	231,0	96,2	7,2	0,0	-2,6	177,2
Ferrol.....	33,3	90,5	11,4	0,0	0,0	43,4
Torre Vieja	126,0	119,1	129,1	0,0	0,0	120,6
Toledo	125,4	91,8	58,2	0,0	125,8	111,1
Guadalajara	173,2	82,9	223,8	0,0	0,0	151,0
Ciudad Real.....	228,8	122,4	0,0	0,0	0,0	181,1
Zamora.....	144,6	107,0	0,0	239,4	0,0	124,8
Segovia	173,0	66,7	92,3	0,0	89,7	139,4
Ávila.....	130,2	230,6	77,7	0,0	98,3	146,4
Mérida	228,7	176,6	6,3	0,0	0,0	193,7
Huesca	182,2	135,5	9,8	0,0	95,2	155,1
Cuenca.....	198,7	89,8	32,6	975,8	92,7	172,5
Soria.....	89,1	0,0	235,0	61,9	109,9	79,6
Teruel	165,8	95,8	31,7	0,0	0,0	135,1
<100.000 habitantes	159,6	108,4	83,0	98,9	52,7	139,9

Fuente: Instituto Klein, AEAT, Dirección General de Coordinación Financiera con las Haciendas Locales, y elaboración propia.

CUADRO Nº 13

ESFUERZO FISCAL EN TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES (MEDIA = 100)											
MUNICIPIOS ORDENADOS SEGÚN POBLACIÓN	DESAGREGACIÓN DE LAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL (*)										
	319.00	319.01	319.02	319.03	319.04	319.05	319.06	319.08	319.09	319.11	319.12
Madrid	0,0	129,8	2,0	0,0	7,9	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	55,3
Barcelona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valencia	0,0	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1	0,0	0,0	57,7
Sevilla	0,0	0,0	216,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2
Zaragoza	166,6	0,0	73,8	0,0	327,4	59,7	83,6	79,5	0,0	0,0	35,4
Málaga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,9
Murcia	0,0	0,0	246,4	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,0	0,0	16,6
Palmas de Gran Canaria (Las)	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
Palma de Mallorca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	438,9
Valladolid	0,0	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	19,7
Córdoba	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,6
Alicante/Alacant	0,0	0,0	114,9	0,0	0,0	0,8	0,0	32,4	0,0	156,4	67,0
Vigo	0,4	0,0	0,0	240,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	278,8
Gijón	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
Hospitalet de Llobregat (L')	0,0	0,0	22,3	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	98,4
Coruña (A)	0,0	92,7	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,5	216,9	127,2	203,6
Granada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,8
Santa Cruz de Tenerife	0,0	0,0	250,6	0,0	0,0	0,0	68,7	64,6	0,0	0,0	16,8
Badalona	0,0	0,0	32,4	0,0	6,8	0,0	0,0	68,4	0,0	0,0	272,0
Oviedo	32,1	33,8	159,0	0,0	30,7	0,0	0,0	176,2	0,0	0,0	44,2
Elche/Elx	0,0	0,0	163,7	0,0	18,7	309,6	41,3	75,6	200,2	0,0	25,7
Móstoles	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	27,2	0,0	89,4	0,0	0,0	22,1
Cartagena	0,0	10,6	174,9	0,0	0,0	23,1	0,0	33,1	0,0	0,0	42,7
Sabadell	0,0	0,0	171,3	3,6	83,9	79,4	50,6	5,2	0,0	181,3	178,5
Jerez de la Frontera	200,8	0,0	272,7	0,0	1110,9	0,0	0,0	1.035,2	0,0	6,6	59,1
Fuenlabrada	0,0	68,2	23,2	0,0	0,0	0,0	191,9	91,5	89,3	0,0	41,7
San Cristóbal de Henares	56,6	0,0	37,1	0,0	0,0	0,0	146,3	0,0	0,0	0,0	38,2
Terrassa	0,0	0,0	178,6	0,0	112,3	370,0	27,0	21,5	0,0	0,0	58,6
Santander	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,7
Leganés	0,0	0,0	45,8	0,0	0,0	72,2	114,6	264,1	0,0	0,0	170,7
Almería	0,0	0,0	210,4	0,0	56,9	0,0	0,0	201,1	0,0	122,7	99,0
Burgos	191,1	0,0	241,5	0,0	0,0	89,7	363,9	50,9	0,0	165,7	155,1
Castellón de la Plana	0,0	0,0	203,9	0,0	0,0	0,0	40,8	71,8	7,7	0,0	25,9
Salamanca	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	0,0	43,6	17,9
Alcorcón	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	30,9	0,0	122,9	0,0	0,0	88,1
Albacete	0,8	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,5	0,0	32,2	57,3
Getafe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,5	106,1	87,5	0,0	0,0	143,2
Huelva	0,0	0,0	170,7	0,0	0,0	0,0	0,0	270,4	65,2	0,0	79,9
Logroño	80,4	80,7	77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	16,4
Badajoz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
San Cristóbal de La Laguna	0,0	0,0	311,8	0,0	0,0	0,3	0,0	96,9	0,0	0,0	50,1
León	108,4	69,9	119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	130,9	0,0	0,0	214,0
Cádiz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	135,0	0,0	0,0	325,3
Tarragona	0,6	0,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	0,0	0,0	76,0
Lleida	0,0	4,6	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	76,2
Marbella	0,0	0,0	420,8	0,0	0,0	0,0	158,4	141,3	0,0	0,0	185,5
Santa Coloma de Gramenet	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5	0,0	0,0	64,0
Jaén	0,0	0,0	236,7	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2	0,0	0,0	59,4
Mataró	0,0	0,0	201,2	0,0	0,0	0,0	5,3	30,1	0,0	0,0	250,6
Algeciras	0,0	0,0	172,3	0,0	0,0	0,0	81,5	241,9	11,4	0,0	103,1
Dos Hermanas	0,0	135,3	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,7	0,0	0,0	27,8
Ourense	115,4	14,5	179,2	0,0	0,0	0,0	0,0	190,9	0,0	109,5	47,0
Torrejón de Ardoz	0,0	0,0	29,1	0,0	55,4	0,0	0,0	200,5	0,0	0,0	71,1
Alcobendas	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,5	0,0	0,0	30,7

CUADRO N° 14

PESO RELATIVO DE LA HACIENDA LOCAL RESPECTO AL CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (EN PORCENTAJES), 2006				
CC.LL./AA.PP.	Deuda pública	Gasto público	Consumo público	FBCF
Bélgica	5,9	14,2	20,9	57,9
Bulgaria.....	2,0	18,3	31,3	33,7
República Checa.....	8,9	27,4	37,1	50,4
Dinamarca.....	17,4	64,7	72,3	72,3
Alemania.....	7,8	15,8	20,3	55,0
Estonia	57,3	25,4	35,3	36,4
Irlanda.....	9,0	19,9	22,2	76,6
Grecia.....	0,7	6,7	Nd	23,5
España	7,1	16,2	19,1	33,1
Francia	11,1	20,8	24,5	72,1
Italia	7,8	31,2	57,2	81,0
Chipre	3,3	4,7	5,5	21,0
Letonia.....	27,1	27,4	44,6	42,3
Lituania	4,9	25,1	38,7	28,1
Luxemburgo	34,7	13,2	17,3	43,2
Hungría	3,6	24,9	43,0	45,4
Malta	0,1	1,5	2,5	3,9
Holanda	15,9	33,3	40,1	66,2
Austria	3,1	15,8	19,7	51,8
Polonia	5,1	30,8	49,8	66,3
Portugal	5,5	13,0	17,6	65,9
Rumania	9,4	24,0	34,5	33,2
Eslovenia	3,2	19,5	27,6	48,6
Eslovaquia	5,3	17,6	27,0	61,9
Finlandia.....	13,7	40,2	63,1	70,1
Suecia	12,5	45,0	72,8	52,9
Reino Unido	10,9	29,0	39,1	58,0
UE-27	8,7	24,4	Nd	59,6
Euro área	8,3	21,2	Nd	61,3

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Fuente: Utrilla de la Hoz (2008) con datos de Eurostat.